

Pérez-Llorca

ANUARIO **2024** YEAR IN REVIEW

Seguros y Reaseguros Insurance and Reinsurance

2024

Índice

1. Introducción	3
2. Principales novedades normativas en España	6
2.1 Normativa en Tramitación	7
3. Normativa UE	9
3.1 Normativa EU Aprobada	9
3.2 En tramitación	10
4. Actualidad jurisprudencial	11
5. Conocimiento Jurídico	12
5.1 Libros	12
5.2 Tribunales PLL	13
5.3 Notas Jurídicas	32
5.4 Menciones en prensa	35
5.5 Artículos Doctrinales	37
5.6 Actividad Docente	37
5.7 Eventos	38
5.8 Reconocimientos	41
6. Nuestro equipo	42
6.1 Seguros y Reaseguros Pérez-Llorca	42

Index

1. Introduction	3
2. Main regulatory developments in Spain	6
2.1 Legislation currently being processed	7
3. EU legislation	9
3.1 Approved EU Legislation	9
3.2 In the pipeline	10
4. Current jurisprudence	11
5. Legal Knowledge	12
5.1 Books	12
5.2 Tribunals PLL	13
5.3 Legal Briefings	32
5.4 In the press	35
5.5 Academic articles	37
5.6 Teaching	37
5.7 Events	38
5.8 Recognition	41
6. Our team	42
6.1 Pérez-Llorca Insurance and Reinsurance	42

1. Introducción

Tras el crecimiento experimentado por el sector en el año anterior, el 2024 experimenta un ligero estancamiento en términos generales, con un crecimiento del 1,16% del sector asegurador en ingresos por primas. Según datos publicados por UNESPA, algunos ramos de seguros generales experimentaron repuntes cercanos al 10%, mientras que se observó un descenso del 12,65% en seguros de vida después de los excepcionales resultados cosechados el año anterior.

Desafortunadamente, el 2024 ha sido testigo de siniestros de trágicas consecuencias, como el incendio ocurrido en Valencia el 22 de febrero de 2024 y el más reciente episodio de la DANA que golpeó con dureza a la Comunidad Valenciana y a otros territorios en Castilla-La Mancha y parte de Andalucía el pasado 29 de octubre de 2024, si bien resulta destacable, por ejemplar, la respuesta del Sector Asegurador ante semejantes tragedias, en concurso con la imprescindible labor del Consorcio de Compensación de Seguros.

Por otro lado, continúa siendo de actualidad la incertidumbre que existe respecto del futuro de MUFACE. Confiamos en que el Gobierno consiga encontrar la solución para que casi 1,5 millones de nuestros funcionarios puedan continuar con su cobertura de salud en un equilibrio justo y que pondere todos los intereses en juego, muy en particular el de la lógica inquietud de las compañías por alcanzar como mínimo un equilibrio técnico entre primas y prestaciones.

En el terreno normativo hemos sido testigos de novedades legislativas y desarrollo de proyectos de gran impacto para el sector. Por ejemplo:

- » El Proyecto de Ley por el que se regulan los servicios de atención a la clientela y el proyecto de ley de creación de la Autoridad de Defensa al Cliente Financiero. Ambos proyectos se encuentran en tramitación en el Congreso.
- » El Proyecto de la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, que tiene como objetivo transponer las previsiones de la Directiva publicada en el 2021 y que, entre otras cosas, se prevé que extienda la exigencia del seguro obligatorio a los patinetes eléctricos y a otros vehículos de movilidad personal.

La tramitación de estas iniciativas ha encontrado un importante obstáculo en la fragilidad de las mayorías parlamentarias actuales y permaneceremos vigilantes al desarrollo que puedan tener en este 2025 por las relevantes implicaciones que tendrían bajo su actual redacción para el sector en su conjunto.

Hemos de referirnos también a normas que sí fueron aprobadas definitivamente, como la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, y los Reales Decretos-ley 5/2023 y 6/2023, que se dirigen a agilizar la actividad judicial impulsando la tramitación de los procedimientos y su digitalización. Además, quedó aprobado el Real Decreto 1086/2024, de 22 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, para el impulso de los planes de pensiones de empleo, mediante el que se introducen mejoras técnicas y se profundiza en aspectos neces-

1. Introduction

After the growth enjoyed by the sector in 2023, 2024 saw slight stagnation in general terms, with growth of 1.16% in premium income in the insurance sector. According to data published by UNESPA, some branches of general insurance experienced increases of close to 10% while a decline of 12.65% was noted in life insurance after the exceptional results achieved in the previous year.

Unfortunately, 2024 also saw tragic losses, such as the fire in Valencia on 22 February 2024 and, most recently, DANA which struck the Valencian Community and other areas in Castilla-La Mancha and part of Andalusia on 29 October 2024. However, the response of the insurance sector to such tragedies, together with the essential work of the Insurance Compensation Consortium, has been exemplary.

Moreover, the uncertainty regarding MUFACE's future continues to be topical. We trust that the Government will manage to find a solution that will allow almost 1.5 million of our civil servants to maintain their health coverage in an equitable balance that considers all the interests at stake, in particular the logical concern of the companies to achieve at least a technical balance between premiums and benefits.

In the regulatory sphere, we have witnessed legislative developments and the development of draft legislation that has had a major impact on the sector. This legislation includes:

- » The Draft Law regulating Customer Services and the Draft Law creating the Financial Customer Protection Authority. Both draft laws are currently being processed in Congress.
- » The Draft Law on Civil Liability and Insurance in the Circulation of Motor Vehicles, which aims to transpose the provisions of the Directive published in 2021 and which, among other things, is expected to extend the requirement for compulsory insurance to electric scooters and other personal mobility vehicles.

The processing of these initiatives has encountered a major obstacle due to the fragility of the current parliamentary majorities and we will continue to monitor their progress in 2025 due to the significant implications that they would have for the sector as a whole based on their current wording.

We must also mention regulations that were definitively approved, such as Organic Law 1/2025 of 2 January on Measures for the Efficiency of the Public Service of Justice, the Organic Law on the Right of Defence, and Royal Decree-laws 5/2023 and 6/2023, which seek to streamline judicial activity by promoting the processing of proceedings and their digitalisation. In addition, Royal Decree 1086/2024 of 22 October was approved, amending the Regulation of pension plans and funds, approved by Royal Decree 304/2004 of 20 February for the promotion of occupational pension plans, which introduces technical improvements and delves into the neces-

rios para completar el desarrollo reglamentario de la Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo.

En el plano internacional, resulta destacable la modificación de la Directiva Solvencia II, pues se hicieron públicas las enmiendas del Parlamento Europeo y afectan, por ejemplo, a los parámetros de aplicación del principio de proporcionalidad, a los requisitos de honorabilidad exigible a los altos cargos de las entidades aseguradoras, la implementación de una política que fomente la igualdad de género en el consejo de administración, la gestión del riesgo de liquidez o la actividad transfronteriza. Queda por ver las decisiones que adopte en adelante el Consejo de la Unión Europea tras estas propuestas. También resultan destacables la declaración de EIOPA sobre los reaseguros concertados con entidades de terceros países, el informe de evaluación sobre la supervisión del principio de prudencia en Solvencia II o los avances en las propuestas para establecer un sistema de garantía europeo para el caso de que las entidades aseguradoras se encuentren en dificultades económicas. Todo ello sin olvidar los avances en la promulgación de una normativa que regule la inteligencia artificial y su régimen de responsabilidad, que por ahora tiene su principal horizonte en el avance de la propuesta de Directiva sobre este particular.

En el campo de la jurisprudencia hemos conocido importantes fallos judiciales:

- » La STS 774/2024 de 3 de junio (Rec. 6628/2019), que avaló la aplicación de la regla *contra proferentem* en las pólizas de grandes riesgos, al considerar que la póliza en cuestión no dejaba de ser un contrato de adhesión. Ítem más, la referenciada sentencia recordó que la exclusión de la imperatividad de las normas de la Ley del Contrato de Seguro en los grandes riesgos tiene sentido *inter-partes*, pero no rige respecto a los terceros perjudicados.
- » La STS 790/2024 de 4 de junio (Rec. 3645/2019) estableció que el promotor que vende la vivienda objeto de construcción a un tercero pierde la condición de asegurado bajo la póliza decenal y por ende la legitimación para reclamar frente a la aseguradora, condición que se transfiere *ipso iure* al adquirente con la propiedad.
- » Cabe destacar igualmente la STS 434/2024, de 1 de abril (Rec. 5674/2019), sobre seguros de vida vinculados a préstamos hipotecarios, o la SAP de Madrid, de 10 de enero de 2023, sobre el derecho de resolución que asiste a los tomadores de seguros *unit-linked*.

En nuestro anterior anuario destacábamos las iniciativas del legislador europeo sobre el fenómeno de la IA y su impacto en el sector asegurador. En 2024 estos proyectos cristalizaron al aprobarse finalmente el 13 de marzo el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, cuyo contenido se ciñe a las directrices que ya pudimos conocer en diciembre de 2023. Este Reglamento viene a armonizar la normativa existente en la materia, estableciendo principios y unificando criterios sobre la utilización responsable y segura de la inteligencia artificial dentro del espacio económico europeo. Tal y como habíamos advertido en anteriores ocasiones, el uso regulado de la IA traerá profundos cambios al sector, ayudando de manera decisiva desde la identificación y suscripción de riesgos, a la trami-

sary aspects to complete the regulatory development of Law 12/2022 of 30 June regulating the promotion of occupational pension plans.

At the international level, the modification of the Solvency II Directive is noteworthy, as the European Parliament's amendments were made public and affect, for example, the parameters of application of the principle of proportionality, the requirements of good standing for senior managers of insurance companies, the implementation of a policy that promotes gender equality on the board of directors, liquidity risk management and cross-border activity. It remains to be seen what decisions the Council of the European Union will make following these proposals. Also noteworthy are the EIOPA statement on reinsurance concluded with third-country entities, the evaluation report on the supervision of the prudent person principle in Solvency II and the progress made on the proposals to establish a European guarantee scheme in the event that insurance companies find themselves in financial difficulties. We must not forget the progress made in the enactment of legislation regulating artificial intelligence and its liability regime, which for the time being is mainly focused on the progress of the proposal for a Directive on this matter.

In terms of case law, there have been a number of significant court rulings:

- » Supreme Court Judgment 774/2024 of 3 June (Rec. 6628/2019) which endorsed the application of the *contra proferentem* rule in large risks policies. The Court held that the policy in question was still a contract of adhesion. Furthermore, the aforementioned judgment noted that the exclusion of the imperative nature of the provisions of the Insurance Contract Law in large risks makes sense on an *inter partes* basis but does not apply to injured third parties.
- » Supreme Court Judgment 790/2024 of 4 June (Rec. 3645/2019) established that a developer who sells a dwelling under construction to a third party loses the status of an insured party under the ten-year policy and, therefore, the standing to claim against the insurer, a status that is transferred *ipso iure* to the buyer with the property.
- » It is also worth mentioning Supreme Court Judgment 434/2024 of 1 April (Rec. 5674/2019) on life insurance linked to mortgage loans, or the Judgment of the Madrid Court of Appeal of 10 January 2023 on the right of termination that applies to policyholders of unit-linked insurance.

In our previous Year in Review, we highlighted the European legislature's initiatives on the topic of AI and its impact on the insurance sector. In 2024, this draft legislation crystallised with the final approval of the EU's Artificial Intelligence Act on 13 March, the content of which closely follows the guidelines that we learned of in December 2023. The Act harmonises the existing regulations on the matter, establishing principles and unifying criteria for the responsible and safe use of artificial intelligence within the European economic area. As we have noted on previous occasions, the regulated use of AI will bring profound changes to the sector, helping decisively from the identification and underwriting of risks, to the processing of

tación de los propios siniestros, pasando también por la delegación de determinadas tareas administrativas.

En cuanto a los seguros de riesgos transaccionales, destaca el crecimiento de los seguros de litigios y riesgos contingentes, que han comenzado a ofrecerse de manera más consistente y han sido suscritos en operaciones relevantes de nuestro país. La llegada de estos productos se une a la consolidación de los seguros de contingencias fiscales y de título, que junto con el tradicional seguro de manifestaciones y garantías (W&I), refuerza la utilidad de estas soluciones aseguradoras en la mitigación de distintos riesgos en operaciones de M&A en España.

Finalmente, si en nuestra anterior edición compartíamos con vosotros la nueva andadura de Pérez-Llorca en Portugal, desde Pérez-Llorca cerramos esta edición destacando la apertura de oficinas en México D.F. y Monterrey gracias a la alianza con la firma González Calvillo, que integra más de 160 profesionales en aquella jurisdicción, bases que confiamos contribuyan a expandir y fortalecer el asesoramiento jurídico de primer nivel que deseamos siempre ofrecer al Sector Asegurador.

Esperamos que este Anuario os resulte de interés y os trasladamos nuestros mejores deseos para este 2025.

claims, as well as the delegation of certain administrative tasks.

Regarding transactional risk insurance, the growth of litigation and contingent risk insurance is noteworthy, as such insurance has begun to be offered more consistently and has been included in significant transactions in Spain. The arrival of these products is coupled with the consolidation of tax contingency and title insurance, which, together with the traditional representations and warranties (W&I) insurance, reinforces the utility of these insurance solutions in the mitigation of different risks in M&A transactions in Spain.

Finally, after having announced Pérez-Llorca's new venture in Portugal in our last edition, we wish to wrap up this edition by announcing the opening of offices in Mexico City and Monterrey thanks to the alliance with the firm González Calvillo. This alliance adds more than 160 professionals in Mexico, which we trust will help to expand and strengthen the high-quality legal advice that we always wish to offer to the insurance sector.

We hope this Year in Review will be of interest to you and we wish you all the best for 2025.



MAD

Joaquín Ruiz Echaury
Socio/Partner

jruiz-echaury@perezllorca.com
T: +34 91 432 51 58



MAD

Rafael Fernández
Socio/Partner

rfernandez@perezllorca.com
T: +34 91 389 01 03



MAD

Felipe Vázquez Acedo
Socio/Partner

fvazquez@perezllorca.com
T: +34 91 432 51 20



LIS

Inês Palma Ramalho
Socio/Partner

iramalho@perezllorca.com
T: +351 211 255 512

2. Principales novedades normativas en España

Eficiencia del Servicio Público de Justicia

Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta Ley Orgánica culmina el plan de eficiencia puesto en marcha dentro del Plan Justicia 2030 y que incluía también los proyectos de ley sobre eficiencia procesal, organizativa y digital.

Esta ley se estructura en dos títulos. El primero de ellos acomete la reforma organizativa de la Administración de Justicia, mientras que el segundo contiene un gran bloque de reformas en la línea de las modificaciones ya introducidas por el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, y el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre.

Originalmente estaba previsto que esta ley también incluyera la regulación de las acciones colectivas en España, transponiendo la Directiva (UE) 2020/1828, relativa a las acciones de representación, sin embargo durante la tramitación del proyecto de ley de eficiencia del servicio público justicia se cayó por falta de apoyo y se acabaron retirando las enmiendas que regulaban las acciones colectivas y buscaban transponer la Directiva (UE) 2020/1828, relativa a las acciones de representación.

Representación paritaria

Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. Mediante esta ley orgánica se busca garantizar la representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombre en el sector público y privado.

Para ello se establece la obligación a las grandes empresas y Administración General del Estado a contar con un mínimo del 40% de mujeres en sus órganos de dirección.

En la Disposición transitoria primera, se establecen los siguientes periodos adaptación:

- » Compañías Ibex antes del 30 de junio de 2026
- » Resto de empresas cotizadas en el año 2027
- » Sindicatos y asociaciones empresariales hasta 30 de junio de 2028
- » Designación de los miembros de las juntas de gobierno o consejos de gobierno de los colegios profesionales hasta 30 de junio de 2029
- » Los consejos de administración y alta dirección de entidades de interés público deberán alcanzar el porcentaje del 33% del sexo menos representado el 30 de junio de 2026, y el 40% el 30 de junio de 2028

2. Main regulatory developments in Spain

Efficiency of the Public Service of Justice

Organic Law 1/2025, of 2 January, on Measures for the Efficiency of the Public Service of Justice. This Organic Law concludes the efficiency plan launched as part of the Justice 2030 Plan, which also included the draft laws on procedural, organisational and digital efficiency.

This law is divided into two titles. The first of these deals with the organisational reform of the Administration of Justice, while the second contains a large block of reforms based on the amendments already introduced by Royal Decree-law 5/2023 of 28 June and Royal Decree-law 6/2023 of 19 December.

It was originally planned to include the regulation of collective actions in Spain in this law, transposing Directive (EU) 2020/1828 on representative actions. However, during the processing of the draft law on the efficiency of the public service of justice, it was dropped due to a lack of support, and the amendments regulating collective actions and seeking to transpose Directive (EU) 2020/1828 on representative actions were withdrawn.

Parity of representation

Organic Law 2/2024, of 1 August, on equal representation and balanced presence of women and men. This organic law seeks to guarantee the equal representation and balanced presence of women and men in the public and private sectors.

Accordingly, it establishes the obligation for large companies and the General State Administration to have a minimum of 40% of women in their management bodies.

In the First Transitional Provision, the following adaptation deadlines have been established:

- » Ibex companies before 30 June 2026
- » Other listed companies by 2027
- » Trade unions and employers' associations by 30 June 2028
- » The appointment of members of governing boards or governing councils of professional bodies by 30 June 2029
- » The boards of directors and senior management of public interest entities must ensure that the percentage of the underrepresented sex reaches 33% by 30 June 2026, and 40% by 30 June 2028

Pensiones

Circular de 19 de febrero de 2024, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se establecen las normas para calcular las previsiones de prestaciones de pensión, a efectos de la información que se suministra a los partícipes de los planes de pensiones de empleo en la declaración de las prestaciones de pensión. Mediante esta circular se establecen las normas de cálculo de las previsiones de prestación para la jubilación. Se fija la información que debe suministrarse a los partícipes de los planes de pensiones de empleo. Por otro lado, se fijan los criterios que sirven para definir las variables utilizadas para calcular estas previsiones.

Planes y fondos de pensiones

Real Decreto 1086/2024, de 22 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, para el impulso de los planes de pensiones de empleo.

2.1 Normativa en Tramitación

Vehículos a motor

Proyecto de Ley por la que se modifican el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, y la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. **Estado de tramitación:** El Proyecto de Ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor se encuentra paralizado desde junio de 2024 en la Comisión de Economía y Comercio del Congreso de los Diputados. En el paquete de sanciones de noviembre de la Comisión Europea, envió un dictamen motivado a España por la falta de transposición al Derecho interno de la Directiva sobre el seguro de vehículos automóviles modificada (Directiva (UE) 2021/2118), advirtiendo de posibles sanciones económicas si no adapta su legislación.

Creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero

Proyecto de Ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes. El texto propuesto busca configurar una vía extrajudicial para la resolución de conflictos entre las entidades financieras y clientes, y atribuir carácter vinculante a las resoluciones de reclamaciones inferiores a 20.000 euros dictadas por la futura Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Se presentó una enmienda a la totalidad de devolución, pero esta no se aprobó. Actualmente, la tramitación del proyecto continúa, y se encuentra en fase de informe en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación desde el 05 de diciembre del 2024.

Pensions

Circular, of 19 February 2024, of the Directorate General of Insurance and Pension Funds establishing the rules for calculating pension benefit forecasts for the purposes of the information to be provided to members of occupational pension schemes in the declaration of pension benefits. This circular establishes the rules for calculating pension benefit provisions and sets out the information to be provided to members of occupational pension schemes. In addition, it also provides the criteria used to define the variables to calculate these forecasts.

Insurance and pension funds

Royal Decree 1086/2024, of 22 October, amending the Regulation on pension plans and funds, approved by Royal Decree 304/2004, of 20 February, to promote occupational pension plans.

2.1 Legislation currently being processed

Motor vehicles

Draft Law amending the revised text of the Law on civil liability and insurance in the circulation of motor vehicles, approved by Royal Legislative Decree 8/2004, of 29 October, and Law 20/2015, of 14 July, on the regulation, supervision and solvency of insurance and reinsurance companies. **Status:** The Draft Law amending the revised text of the Law on civil liability and insurance in the circulation of motor vehicles has been at a standstill since June 2024 in the Commission for Economy and Trade of the Spanish Congress of Deputies. In the European Commission's November sanctions package, it sent a reasoned opinion to Spain due to the failure to transpose into national law the amended Motor Insurance Directive (Directive (EU) 2021/2118) warning of possible financial penalties if it fails to transpose its legislation.

Creation of an Independent Administrative Authority for the Defence of Financial Customers

Draft Law creating the Independent Administrative Authority for the Defence of Financial Customers for the out-of-court settlement of disputes between financial institutions and their customers. The proposed text seeks to establish an out-of-court channel for the resolution of disputes between financial institutions and customers and to give binding force to decisions on claims with a value of less than 20,000 euros issued by the future Authority for the Defence of Financial Customers. A full referral amendment was tabled but not adopted. Currently, the draft law is still being processed and has been in the reporting phase in the Commission for Economy, Trade and Transformation since 5 December 2024.

Servicios de atención a la clientela

Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela. Mediante este proyecto de ley se pretende mejorar los derechos de los consumidores al establecer para las empresas de los sectores de servicios de suministros de agua, gas y electricidad, servicios de transporte de viajeros, servicios postales, medios audiovisuales de acceso condicional y servicios de comunicaciones electrónicas, la obligación de disponer de un sistema eficaz para facilitar información, atender y resolver las quejas y reclamaciones ágilmente.

Actualmente, la tramitación del proyecto continua, y se encuentra en fase de ampliación de enmiendas desde el 20 de marzo del 2024. Desde entonces, se ha ido ampliando el plazo de enmiendas y la última de estas ampliaciones ha sido hasta el 2 de febrero del 2024.

Modelos de remisión de la información estadístico-contable de los corredores de seguros

Orden por la que se aprueban los modelos de remisión de la información estadístico-contable de los corredores de seguros, corredores de reaseguros, agentes de seguros vinculados y operadores de banca-seguros. Orden por la que se adaptan los modelos de remisión de la documentación estadístico-contable de los corredores de seguros, corredores de reaseguros, agentes de seguros vinculados y operadores de banca-seguros a la normativa contenida en el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales y en el Real Decreto 287/2021, de 20 de abril, sobre formación y remisión de la información estadístico-contable de los distribuidores de seguros y reaseguros.

Customer services

Draft Law regulating customer services. This draft law aims to improve consumer rights by establishing an obligation for companies in the water, gas and electricity supply services, passenger transport services, postal services, conditional access audiovisual media and electronic communications services sectors to have an effective system for providing information, attending to and resolving complaints and claims promptly.

Currently, the processing of the draft law continues and has been in the amendment extension phase since 20 March 2024. Since then, the deadline for amendments has been extended and the latest of these extensions has been until 2 February 2024.

Forms for the submission of statistical and accounting information by insurance brokers

Order approving the forms for the submission of statistical and accounting information by insurance brokers, reinsurance brokers, tied insurance agents and bancassurance operators. Order adapting the forms for the submission of statistical and accounting documentation of insurance brokers, reinsurance brokers, tied insurance agents and bancassurance operators to the regulations contained in Royal Decree-law 3/2020, of 4 February, on urgent measures transposing into Spanish law various European Union directives in the field of public procurement in certain sectors; of private insurance; pension plans and funds; taxation and tax litigation; and Royal Decree 287/2021, of 20 April, on the formation and submission of statistical and accounting information by insurance and reinsurance distributors.

3. Normativa UE

3.1 Normativa EU Aprobada

Solvencia II y DRRES

El Consejo de la Unión Europea **adoptó el 5 de noviembre** dos actos legislativos que modifican la Directiva Solvencia II e introducen nuevas normas sobre recuperación y resolución de empresas de seguros (DRRES). Ambos actos se publicaron el 8 de enero en el DOUE.

La directiva busca introducir un marco europeo armonizado mínimo para la reestructuración y la resolución de las empresas de seguros, garantizando que las aseguradoras y las autoridades competentes de la UE estén mejor preparadas en caso de dificultades financieras importantes, de modo que las autoridades puedan intervenir con prontitud y rapidez. Las nuevas normas protegerán a los tomadores de seguros, reduciendo a la vez al mínimo las repercusiones en la economía y el sistema financiero y evitando el recurso a fondos públicos.

Las nuevas normas sobre Solvencia II buscan potenciar el papel del sector de los seguros y reaseguros para proporcionar fuentes privadas de inversión a largo plazo a las empresas europeas. Ambas normas se encuentran pendientes de publicación en el DOUE.

» **Recuperación y resolución de empresas de seguros (DRRES).**

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco para la recuperación y la resolución de las empresas de seguros o reaseguro.

» **Directiva por la que se modifica Solvencia II.**

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2009/138/CE en lo que respecta a la proporcionalidad, la calidad de la supervisión, la presentación de información, las medidas de garantía a largo plazo, los instrumentos macro prudenciales, los riesgos de sostenibilidad y la supervisión de grupo y transfronteriza, y se modifican las Directivas 2002/87/CE y 2013/34/UE.

3. EU legislation

3.1 Approved EU Legislation

Solvency II and IRRD

On 5 November, the Council of the European Union **adopted two legislative acts** amending the Solvency II Directive and introducing new rules on the recovery and resolution of insurance companies (IRRD). Both acts were published in the OJEU on the 8th of January.

The Directive seeks to introduce a minimum harmonised European framework for the restructuring and resolution of insurance companies, ensuring that EU insurers and competent authorities are better prepared in the event of major financial difficulties, and allowing authorities can intervene promptly and rapidly. The new rules will protect policyholders while minimising the impact on the economy and the financial system and avoiding recourse to public funds.

The new Solvency II rules seek to enhance the role of the insurance and reinsurance sector in providing private sources of long-term investment for European companies. Both rules are awaiting publication in the OJEU.

» **Insurance Recovery and Resolution Directive (IRRD).**

Directive of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the recovery and resolution of insurance or reinsurance undertakings.

» **Directive amending Solvency II.**

Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2009/138/EC as regards proportionality, quality of supervision, reporting, long-term guarantee measures, macro-prudential tools, sustainability risks, group and cross-border supervision, and amending Directives 2002/87/EC and 2013/34/EU.

3.2 En tramitación

Estrategia de Inversión Minorista de la CE

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se modifican las Directivas 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2015/65/UE y (UE) 2016/97, conocida como Directiva Ómnibus, pieza central de la «Estrategia de Inversión Minorista» («**RIS**», por sus siglas en inglés) de la Comisión Europea («**CE**»). Desde el punto de vista asegurador, los principales cambios tendrán lugar en la Directiva (UE) 2016/97, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016, sobre la distribución de seguros («**IDD**»), siendo una de las modificaciones más relevantes la posible prohibición o severa restricción de los incentivos y comisiones en la distribución de productos de inversión basados en seguros («**PIBS**»). Esta propuesta, impulsada por la CE, fue votada en primera lectura por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo el 20 de marzo del 2024. El 2 de abril del 2024 se procedió en pleno del Parlamento Europeo a su primera lectura, debate y posterior propuesta de enmiendas sobre el texto inicial. Actualmente, este texto enmendado se encuentra en escrutinio en sede del Consejo de la Unión Europea, necesitando de su aprobación general para la continuación de su tramitación. Bajo el actual calendario legislativo europeo, no se prevé la eventual aprobación de la norma hasta, como pronto, 2026.

3.2 In the pipeline

EC Retail Investment Strategy

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2009/65/EC, 2009/138/EC, 2011/61/EU, 2015/65/EU and (EU) 2016/97, known as the Omnibus Directive, the centrepiece of the European Commission's («**EC**») «Retail Investment Strategy» («**RIS**»). From an insurance perspective, the main changes will be introduced in Directive (EU) 2016/97 of the European Parliament and of the Council of 20 January 2016 on insurance distribution («**IDD**»), with one of the most significant amendments being the possible prohibition or severe restriction of incentives and commissions in the distribution of insurance-based investment products («**IBIPs**»). This EC-driven proposal was voted in first reading by the European Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs on 20 March 2024. On 2 April 2024, the plenary session of the European Parliament held its first reading, debate and subsequent proposal for amendments to the initial text. This amended text is currently under scrutiny in the Council of the European Union, requiring general approval for its further processing. Under the current European legislative timetable, the eventual adoption of the standard is not anticipated until 2026 at the earliest.

4. Actualidad jurisprudencial 4. Current jurisprudence



Q1 Primer Trimestre Actualidad Jurídica Seguros

[Leer más >](#)



Q1 First Quarter Insurance Legal Update

[Read more >](#)



Q2 Primer Trimestre Actualidad Jurídica Seguros

[Leer más >](#)



Q2 Second Quarter Insurance Legal Update

[Read more >](#)



Q3 Primer Trimestre Actualidad Jurídica Seguros

[Leer más >](#)



Q3 Third Quarter Insurance Legal Update

[Read more >](#)



Q4 Primer Trimestre Actualidad Jurídica Seguros

[Leer más >](#)



Q4 Fourth Quarter Insurance Legal Update

[Read more >](#)

5. Conocimiento Jurídico

5.1 Libros

08/05/2024 Aranzadi

Principales novedades normativas y jurisprudenciales en el sector asegurador 2023

El equipo de Seguros y Reaseguros de Pérez-Llorca presenta por tercer año consecutivo la obra 'Principales novedades normativas y jurisprudenciales en el sector asegurador 2023', elaborada íntegramente por profesionales del Despacho. Disponible por primera vez en edición bilingüe, ha sido dirigido por Joaquín Ruiz Echaury, coordinado por Rafael Fernández y ha contado con la participación de Jesús Almarcha, Fátima Eizaguirre, Luis María González, Gloria González (alumni), Gabriel Llull, Irene Moreno, Juan Pablo Nieto, Paula Pacheco y Sofía Trigo.

23/10/2024 Pontificia Universidad Javeriana Editorial Temis

Teoría general del seguro los grandes temas del seguro contemporáneo: Liber amicorum en homenaje al maestro J. Efrén Ossa G.

Joaquín Ruiz Echaury participa este libro con el capítulo "La regulación de la distribución de seguros en España".

11/11/2024 Aranzadi

Aproximación jurídica al Tercer Sector

Obra que busca proporcionar un análisis jurídico completo de los desafíos que enfrentan las entidades del Tercer Sector en España para cumplir con normativas y operar de manera efectiva. Cuenta con la participación de Rafael Fernández del equipo de seguros, quien se encargó de la redacción del capítulo sobre el contrato de seguro para entidades del tercer sector.

5. Legal Knowledge

5.1 Books

08/05/2024 Aranzadi

Main regulatory and jurisprudential developments in the insurance sector 2023

For the third consecutive year, Pérez-Llorca's Insurance and Re-insurance team presents the book "Main regulatory and jurisprudential developments in the insurance sector 2023", written entirely by professionals from the Firm. Available for the first time in a bilingual edition, its publication has been supervised by Joaquín Ruiz Echaury and coordinated by Rafael Fernández, with the participation of Jesús Almarcha, Fátima Eizaguirre, Luis María González, Gloria González (alumni), Gabriel Llull, Irene Moreno, Juan Pablo Nieto, Paula Pacheco and Sofía Trigo.

23/10/2024 Pontifical Javeriana University Editorial Temis

General insurance theory the major issues in contemporary insurance: Liber amicorum in homage to the master J. Efrén Ossa G.

Joaquín Ruiz Echaury participates in this book with the chapter "The regulation of insurance distribution in Spain".

11/11/2024 Aranzadi

Legal approach to the Third Sector

This book seeks to provide a comprehensive legal analysis of the challenges faced by third-sector entities in Spain in order to comply with regulations and operate effectively. Rafael Fernández from the Insurance and Reinsurance team took part in the drafting of the chapter on insurance contracts for third-sector entities.



14/01/2025 Aranzadi

Jurisprudencia casacional en materia tributaria – Año 2023

Este libro recoge, sistematiza y las sentencias en materia tributaria incluye un descriptor sintético que facilita la búsqueda en función de distintos criterios de localización. Con esta publicación se da continuidad a las obras del mismo título publicadas en 2019, 2020 y 2021, 2022 consolidándose como una colección de referencia para conocer y manejar la jurisprudencia tributaria.

14/01/2025 Aranzadi

Appellate jurisprudence in tax matters - Year 2023

This book collects, categorises and includes a synthetic descriptor that facilitates the search according to different location criteria. This publication is a continuation of the publications of the same title published in 2019, 2020, 2021 and 2022, establishing itself as a reference for learning about and handling tax jurisprudence.

5.2 Tribunales PLL

On se parle. Diálogo supervisor, Derecho administrativo y seguridad jurídica



Joaquín Ruiz Echaury
Socio de Seguros y Reaseguros de Pérez-Llorca



Jesús Cudero
Of Counsel de Fiscal (Alumni)

Es conocido que, desde hace cierto tiempo, la Subdirección General de Autorizaciones, Conductas de Mercado y Distribución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (“DGSFP”), viene refiriéndose al concepto de “diálogo supervisor”, cuando es abordada con relación a autorizaciones de operaciones relativas a buena parte del catálogo de procedimientos relativos a entidades aseguradoras, concretamente operaciones societarias diversas -autorizaciones relativas a participaciones significativas, cesiones de cartera, fusiones, etc.-.

El “diálogo supervisor” se presenta como un concepto que varía según el contexto: puede ser diálogo con otra autoridad de control semejante a la DGSFP, en el contexto de una cesión de cartera transfronteriza, o una compraventa de acciones donde el adquirente sea entidad residente en otro Estado miembro de la Unión Europea (“UE”), o puede simplemente ser un proceso de examen previo, por parte de la DGSFP, de la documentación e información a aportar en un expediente puramente nacional, sin componentes transfronterizos.

En ambos casos, ese “diálogo supervisor” es ni más ni menos que una fase en la que el o los administrados se comunican con la DGSFP de forma oficiosa, sin proceder aún a la presentación de la documentación correspondiente al expediente del que se persigue su pronta autorización en el registro público establecido en la normativa aplicable, la sede telemática de la DGSFP, y, por tanto, sin oficializar la presentación de este.

La primera cuestión que suscita la exigencia de este trámite resulta bastante obvia: ¿cuál es el fundamento jurídico, si es que lo tiene, de tal “diálogo supervisor”, y hasta qué punto tiene base normativa la invitación de la DGSFP a proceder de esta forma?¹

El diálogo supervisor (“*early dialogue*”) aparece, en ese sentido, no en normas nacionales o transposiciones a normas nacionales de Derecho Derivado de la UE, sino en menciones dispersas de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (“EIOPA”, por sus siglas en inglés, *European Insurance and Occupational Pensions Authority*). Así, se cuentan estos ejemplos:

¹ En cualquier caso, el observador perspicaz concluye que ante lo que se está no es ante la necesidad de un diálogo con otro supervisor (sea internacional, sea nacional, como pudiera ser el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (“SEPBLAC”), sino ante una simple falta de medios por parte del regulador, que no está en condiciones de asignar los recursos materiales y, sobre todo, humanos, necesarios para tramitar los expedientes que se le acumulan en los plazos legalmente establecidos. El “diálogo supervisor” tampoco supone que luego el plazo del procedimiento administrativo “formal” se vea reducido, siquiera tangencialmente, con lo que al final estamos ante una ampliación artificial de meses para los procedimientos legalmente previstos.

5.2 Tribunales PLL

On se parle. Early dialogue, administrative law and legal certainty



Joaquín Ruiz Echaury
Insurance and Reinsurance Partner at Pérez-Llorca



Jesús Cudero
Tax Of Counsel (Alumni)

It is well known that, for some time now, the Subdirector General for Authorisations, Market Conduct and Distribution of the Directorate General for Insurance and Pension Funds (“DGSFP”) has been referring to the concept of “early dialogue” when it is dealt with regarding authorisations for transactions relating to a large part of the catalogue of procedures relating to insurance companies, specifically various corporate transactions: authorisations relating to significant shareholdings, portfolio transfers and mergers, among others.

The “early dialogue” is a concept that varies according to the context: it may be a dialogue with another supervisory authority similar to the DGSFP, in the context of a cross-border portfolio transfer, or a sale and purchase of shares where the acquirer is an entity that is resident in another Member State of the European Union (“EU”), or it may simply be a process of prior examination by the DGSFP of the documentation and information to be provided in a purely national case, with no cross-border components.

In both cases, this “early dialogue” is no more and no less than a phase in which the administrators communicate with the DGSFP informally, without submitting the documentation corresponding to the file for which authorisation is sought in the public register established in the applicable regulations, the DGSFP’s website, and, therefore, without formalising the submission of the file.

The first question raised by the requirement for this procedure is quite obvious: What is the legal basis, if any, for such an “early dialogue”, and to what extent does the DGSFP’s invitation to proceed in this way have a regulatory basis?¹

The early dialogue appears, in this sense, not in national rules or transpositions to national rules of EU secondary legislation, but in scattered mentions by the European Insurance and Occupational Pensions Authority (“EIOPA”). Examples include the following:

¹ In any case, the perceptive observer concludes that what we are faced with is not the need for dialogue with another supervisor (whether international or national, such as the Executive Service of the Commission for the Prevention of Money Laundering and Monetary Offences (“SEPBLAC”), but rather a simple lack of resources on the part of the regulator, which is unable to allocate the material and, above all, human resources necessary to process the cases that accumulate within the legally established deadlines. Nor does the “early dialogue” mean that the deadline for the “formal” administrative procedure is reduced, even tangentially, meaning that in the end we are faced with an artificial extension of months for the legally established procedures.

- » Año 2013, consulta (pre-Solvencia 2) sobre la propuesta de pautas sobre remisión de información a las autoridades nacionales (*“Consultation Paper on the Proposal for Guidelines on submission of information to national competent authorities”*). EIOPA se refiere al diálogo supervisor al considerar opciones de remisión a los reguladores de información financiera en el contexto de la transición hacia Solvencia 2, como una nota en la que se destaca que la presentación formal de cierta documentación no descarta que haya un diálogo fluido con los reguladores sobre los efectos de la información suministrada en las cuentas de las aseguradoras.
- » Año 2020, documento sobre aproximación y lecciones aprendidas sobre el primer ejercicio de EIOPA sobre gestión de crisis (*“Approach and lessons learned from EIOPA’s first crisis walkthrough exercise”*). El documento menciona el concepto de una forma diametralmente opuesta, al referirse a la importancia de los canales de comunicación entre EIOPA y los distintos reguladores nacionales, todo ello, como decimos, en el contexto de una crisis.
- » Año 2021-2022, trabajos y documento final sobre la supervisión de compañías que se encuentren en liquidación (*“Supervisory Statement on Supervision of Run-off Undertakings”*). Es este quizás el documento que más proximidad guarda con el procedimiento oficioso esgrimido por la Subdirección General de Autorizaciones, Conductas de Mercado y Distribución de la DGSFP. Concretamente, en el contexto de la adquisición de carteras en run-off por parte de una compañía, sea por transmisión de participaciones significativas de la compañía en run-off, sea por cesión de cartera,
- » 2013, “Consultation Paper on the Proposal for Guidelines on submission of information to national competent authorities”. EIOPA refers to early dialogue when considering options for the submission of financial information to regulators in the context of the transition to Solvency II, as a note stressing that the formal submission of certain documentation does not preclude an ongoing dialogue with regulators on the effects of the information provided on insurers’ accounts.
- » 2020, “Approach and lessons learned from EIOPA’s first crisis walkthrough exercise”. The document mentions the concept in a diametrically opposite way, referring to the importance of communication channels between EIOPA and the different national regulators, all of this, as we say, in the context of a crisis.
- » 2021-2022, “Supervisory Statement on supervision of run-off undertakings”. This is perhaps the document that is closest to the informal procedure proposed by the DGSFP’s Subdirector General for Authorisations, Market Conduct and Distribution. Specifically, in the context of the acquisition of portfolios in run-off by a company, either by transfer of significant shareholdings in the company in run-off, or by portfolio transfer,

“Se anima a la aseguradora, potencialmente compradora o cesionaria, a tener un diálogo supervisor con la autoridad de control antes de remitirle la notificación formal de la adquisición de la participación significativa o la cesión de cartera, de acuerdo con los artículos 57 o 39 de la Directiva de Solvencia 2, respectivamente. La aseguradora que pretenda adquirir una cartera en run-off (para la que se necesita la autorización del regulador de acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de Solvencia 2), es animado a proporcionar a las autoridades de supervisión la información definida en el punto 4.1 junto a un informe de actuario externo que valore la adecuación de las provisiones técnicas relativas a la cartera a ser transferida”².

Este es el contexto³ de este concepto de nuevo cuño que es empleado, como decimos, por la DGSFP. La expresión aparece aisladamente, por tanto, en distintos ámbitos y con diferentes significados, configurándose sólo en uno, el de la adquisición de carteras en run-off, como algo remotamente parecido a la pretensión del regulador es-

“A potential acquiring or transferee insurer is encouraged to have an early dialogue with the supervisory authority prior to sending it formal notification of the acquisition of the qualifying holding or the portfolio transfer, in accordance with Articles 57 or 39 of the Solvency II Directive, respectively. An insurer that intends to acquire a portfolio in run-off (for which authorisation from the regulator is required under Article 39 of Solvency II) is encouraged to provide the supervisory authorities with the information defined in point 4.1 together with an external actuary’s report assessing the adequacy of the technical provisions relating to the portfolio to be transferred”².

This is the context³ of this new concept used by the DGSFP. Therefore, the expression appears in isolation, in different scopes and with different meanings, configured in only one, that of the acquisition of portfolios in run-off, as something remotely similar to the Spanish regulator’s claim of the nec-

² The potential acquirer/accepting undertaking is encouraged to have an early dialogue with the supervisory authority before submission of the formal notification on the acquisition of a qualifying holding or on the transfer of portfolio in accordance with Article 57 or with Article 39 of Solvency II respectively. The undertaking intending to acquire a run-off portfolio (for which it is requested the authorisation of the supervisory authority in accordance with Article 39 of Solvency II) is encouraged to provide the supervisory authority the information defined in point 4.1 as well as an external actuarial report assessing the adequacy of technical provisions related to the portfolio transfer.

³ Con alguna breve referencia más, como la existente en el Documento de Discusión sobre Blockchain y Smartcontracts en Seguros (*Discussion Paper on Blockchain and Smartcontracts in Insurance*).

² The potential acquirer/accepting undertaking is encouraged to have an early dialogue with the supervisory authority before the submission of the formal notification on the acquisition of a qualifying holding or on the transfer of a portfolio under Article 57 or Article 39 of Solvency II respectively. An undertaking that intends to acquire a run-off portfolio (for which the authorisation of the supervisory authority under Article 39 of Solvency II is requested) is encouraged to provide the supervisory authority with the information defined in point 4.1 as well as an external actuarial report assessing the adequacy of technical provisions related to the portfolio transfer.

³ With a few more brief references, such as the one in the Discussion paper on blockchain and smart contracts in insurance.

pañol de necesaria presentación oficiosa de la documentación relativa a la autorización de una operación societaria como paso previo a la presentación telemática y oficial de la misma. Como otra nota a valorar, esa “presentación oficiosa”, no se produce totalmente fuera de los canales de comunicación que uno puede aventurar como normales con la DGSFP, al hacerse a través de un espacio electrónico creado exprofeso en su plataforma. Las partes intervinientes en cualquier transacción sujeta a condiciones suspensivas entre las que se cuente una autorización de la DGSFP, deben por tanto, tener en cuenta a efectos de las fechas límites para el cumplimiento de éstas (“*long stop dates*”), que los plazos y actos administrativos de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (“**LOSSEAR**”) y Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (“**ROSSEAR**”), pueden verse significativamente alterados y, sobre todo, generarse una tremenda incertidumbre sobre si se han de entender o no cumplidas las obligaciones respectivas cuando no se procede a una presentación “formal” de la solicitud de autorización, sino meramente a una “oficiosa”, a través del diálogo supervisor.

Sea como fuere, el trámite que nos ocupa (el “diálogo supervisor”) es exigido por el supervisor en relación con el ejercicio de las competencias que a la Administración del Estado le confiere el artículo 16 de la LOSSEAR. Lo que ocurre es que el artículo siguiente de esa ley -el artículo 17- no otorga a la DGSFP competencia alguna para “regular”, “crear” o “exigir” un trámite de esta naturaleza; y mucho menos para que este trámite actúe -al menos, de facto- como una suerte de *prius* o de presupuesto ineluctable para que se inicie alguno de los procedimientos -estos sí legalmente previstos- que la propia norma prevé.

Lo único lejanísimamente parecido a un “diálogo supervisor” (en cuanto se prevé un trámite distinto del estrictamente procedimental), lo encontramos en la regulación de la “consulta previa a autoridades de supervisión” prevista en el artículo 26. Pero estos dos extremos no tienen, en puridad, nada que ver con el “diálogo supervisor” que nos ocupa. Los interrogantes que la exigencia de este trámite suscita son varios: ¿qué validez tiene exigir a los administrados que acudan al “diálogo supervisor” como trámite previo a la incoación de los procedimientos legalmente previstos? ¿Entra en contradicción con algún mandato jurídico superior que deba obedecer la DGSFP? ¿La presentación “oficiosa” de la documentación supone, per se, un acto administrativo que desencadena el comienzo de un procedimiento sometido a determinados plazos administrativos? ¿El cómputo de esos plazos se inicia con la activación del “diálogo supervisor” o este es un trámite inocuo desde el punto de vista administrativo?

La cuestión no es en absoluto baladí si tenemos en cuenta la remisión general que efectúa la Disposición Adicional Decimosexta de la LOSSEAR al afirmar que “los procedimientos regulados en esta Ley se regirán, en primer término, por los preceptos contenidos en ella y en sus normas de desarrollo y, subsidiariamente, por los de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y normas complementarias”.

Esta remisión significa que las actuaciones en el ámbito de la concesión de autorizaciones por parte de la DGSFP se gobiernan por

essary informal presentation of the documentation relating to the authorisation of a corporate transaction as a prior step to the electronic and official presentation of the same. On another note, this “informal filing” does not take place entirely outside the channels of communication with the DGSFP, as it is carried out using an electronic space created specifically for this purpose on the DGSFP’s platform. Therefore, the parties involved in any transaction subject to conditions precedent, including authorisation from the DGSFP, must take into account, for the purposes of the long stop dates for compliance with these, that the deadlines and administrative acts of Law 20/2015, of 14 July, on the Organisation, Supervision and Solvency of Insurance and Reinsurance Entities (the “**LOSSEAR**”) and Royal Decree 1060/2015, of 20 November, on the Organisation, Supervision and Solvency of Insurance and Reinsurance Entities (the “**ROSSEAR**”), can be significantly altered and, above all, generate tremendous uncertainty as to whether or not the respective obligations are to be understood to have been fulfilled when there is no “formal” submission of the application for authorisation, but merely an “informal” one, through the early dialogue.

Be that as it may, the procedure in question (the “early dialogue”) is required by the supervisor in connection with the exercise of the powers conferred on the State Administration by Article 16 of the LOSSEAR. Article 17 of the LOSSEAR does not grant the DGSFP any power to “regulate”, “create” or “require” a procedure of this nature; and much less for this procedure to act - at least effectively - as a sort of prior or unavoidable presupposition for any of the procedures - which are legally provided for - that the law itself envisages.

The only thing that remotely resembles an “early dialogue” (insofar as a step other than the strictly procedural one is envisaged) is found in the regulation of the “prior consultation of supervisory authorities” established in Article 26. But strictly speaking, these two extremes have nothing to do with the “early dialogue” in question. Several questions are raised by the requirement of this procedure: What validity does it have to require that those who are subject to the “early dialogue” as a step prior to the initiation of the legally established procedures? Does it contradict any higher legal mandate that the DGSFP must obey? Does the “informal” submission of documentation constitute, per se, an administrative act which triggers the initiation of a procedure subject to certain administrative time limits? Does the calculation of those time limits begin with the activation of the “early dialogue”, or is this an administratively innocuous procedure?

The question is by no means trivial if we take into account the general reference contained in the Sixteenth Additional Provision of the LOSSEAR, which states that “the procedures regulated in this Law shall be governed, in the first instance, by the provisions contained therein and in its implementing rules and, subsidiarily, by those of Law 30/1992, of 26 November, on the Legal Regime of the Public Administrations and Common Administrative Procedure and complementary rules”.

This reference means that the DGSFP’s actions in the area of granting authorisations are governed by the now current Law

la ahora vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (“LPAC”).

Con la exigencia de este “diálogo supervisor”, la Administración se aparta de las reglas procedimentales legalmente previstas (las de la LOSSEAR y las de la LPAC) exigiendo a los interesados que la tramitación de un expediente de autorización de una determinada operación se inicie de forma “oficiosa”, al margen de los cauces ordinarios, concretamente, no a través de la sede telemática de la DGSFP y conforme a los pasos y tiempos establecidos en la LOSSEAR y ROSSEAR, sino mediante un trámite no previsto, anómalo y con evidente incidencia en los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos.

Resulta obligado recordar que, en nuestro ordenamiento jurídico, la vía de hecho es una pura actuación material, no amparada ni siquiera aparentemente por una cobertura jurídica. En la exposición de motivos de nuestra Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, se hacía referencia -para superar el carácter revisor de esta jurisdicción- a la previsión de un recurso contra las actuaciones materiales en vía de hecho, a través del cual se pudieran combatir aquellas actuaciones materiales de la Administración que carecen de la necesaria cobertura jurídica y lesionan derechos e intereses legítimos de cualquier clase.

En nuestra opinión, la exigencia de un trámite no previsto legalmente como verdadera *conditio sine qua non* de incoación del procedimiento establecido en la normativa vigente puede integrar un supuesto de vía de hecho. Es cierto que el Tribunal Supremo tiene declarado -por todas, en Sentencia de 23 de junio de 2017, rec.núm 2655/2016- que no existe vía de hecho en los casos de mínima infracción del procedimiento que no afecte a los derechos fundamentales de un modo claro y frontal, ni genere indefensión, exigiéndose una actuación desproporcionada de la Administración para apreciarla. Pero en el caso que nos ocupa, el requerimiento al interesado de que acuda a este “diálogo supervisor” permite identificar un comportamiento de la Administración sin cobertura legal alguna y, lo que es peor, que actúa de facto como una verdadera condición para iniciar un procedimiento autorizatorio de acuerdo con la normativa aplicable.

Es evidente que la actuación material analizada no puede verse justificada en las dispersas referencias que hemos apuntado al “*early dialogue*” en documentación de EIOPA, por cuanto lo que puede amparar a la DGSFP en el ejercicio de sus funciones de supervisión son “las directrices y las recomendaciones” de aquella (cfr. artículo 17 de la LOSSEAR), pero fuera de ellas, nada que haya dicho, hecho o analizado EIOPA puede injustificadamente alterar las obligaciones y constricciones que le impone el Derecho interno español, más concretamente las propias exigencias de la LOSSEAR y ROSSEAR, y LPAC.

Cabe, pues, considerar que la práctica constituye una vía de hecho toda vez que la Administración en este supuesto realmente no actúa, sino que atropella y, por eso mismo, queda privada de las prerrogativas y potestades que tienen razón de ser en el ejercicio legítimo.

Obsérvese que la invocación del “diálogo supervisor” produce diversas consecuencias. Ante la actuación material descrita, el ad-

39/2015, of 1 October, on Common Administrative Procedure for Public Administrations (“LPAC”).

By requiring this “early dialogue”, the Administration departs from the procedural rules established by law (those of the LOSSEAR and those of the Law on Administrative Procedure) by requiring interested parties to initiate the processing of a file to authorise a given transaction “informally”, outside the ordinary channels, specifically, not through the DGSFP’s electronic site and in accordance with the steps and timeframes established in the LOSSEAR and the ROSSEAR, but through an unplanned, anomalous procedure with a clear impact on the processing times of administrative procedures.

It should be noted that, in the Spanish legal system, a *de facto* action is a purely material action, not even seemingly covered by legal protection. In the Explanatory Memorandum of Law 29/1998, of 13 July, regulating the Contentious-Administrative Jurisdiction, reference was made - in order to overcome the revisory nature of this jurisdiction - to the provision of an appeal against material actions in factual proceedings, through which those material actions of the Administration that lack the necessary legal cover and infringe legitimate rights and interests of any kind could be fought.

In our opinion, the requirement of a procedure not provided for by law as a true *conditio sine quo non* for the initiation of the procedure established in the regulations in force may constitute a *de facto* breach of procedure. Admittedly, the Supreme Court has declared - for example, in the judgment of 23 June 2017, appeal 2655/2016 - that there is no *de facto* breach of procedure in cases of minimal infringement of the procedure that does not affect fundamental rights in a clear and frontal manner, and which does not lead to defencelessness, requiring a disproportionate action by the Administration in order to recognise it. However, in the case in question, the requirement that the interested party attend this “early dialogue” enables the identification of conduct by the Administration without any legal cover whatsoever and, what is worse, which acts as a *de facto* condition for initiating an authorisation procedure under the applicable regulations.

It is clear that the material action analysed cannot be justified by the scattered references we have noted to “*early dialogue*” in EIOPA documentation, since what can protect the DGSFP in the exercise of its supervisory functions are “the guidelines and recommendations” of the DGSFP (cfr. Article 17 of the LOSSEAR), but apart from these, nothing that EIOPA has said, done or analysed can unjustifiably alter the obligations and constraints imposed on it by Spanish domestic law, more specifically, the requirements of the LOSSEAR and the ROSSEAR, and the LPAC.

Therefore, it can be considered that the practice constitutes a *de facto* breach, given that the Administration, in this case, does not really act, but rather breaches and, for that very reason, is deprived of the prerogatives and powers that have their *raison d’être* in the legitimate exercise.

Note that the invocation of “early dialogue” has perverse consequences. In the face of the material action described above,

ministrado solo tiene tres opciones: (i) aquietarse con un trámite alegal, no previsto, y consentir que se produzca una extensión del plazo del procedimiento legamente previsto, (ii) ignorar la petición de la Administración de que le sea suministrada oficiosamente la documentación del expediente administrativo y, por tanto, proceder a la solicitud en vía telemática según el procedimiento establecido, o (iii) recurrir en vía contencioso-administrativa, ex artículo 46.3 de la LJCA, en el mismo momento en que la Administración habilita un canal de comunicación para el “diálogo supervisor” al margen, como hemos visto, de las previsiones legales para la obtención de la autorización interesada.

Difícil tesitura en la que se coloca a los administrados (en nuestro caso, aquellos partícipes en el sector asegurador), cuando se enfrentan a esta solicitud de “diálogo supervisor”, lo que suele conducirles a aceptar, como mal menor, la realización de un trámite no previsto en el ordenamiento, lo que lleva a que en cualquier contrato o convenio que esté sometido a condiciones suspensivas o a la realización de acciones determinadas para su cumplimiento, los plazos ordinarios de la LOSSEAR y ROSSEAR para resolución de expedientes de autorización de todo tipo se vean incrementados con un plazo indeterminado, artificial, durante el que el expediente estará en una suerte de limbo jurídico.

Sin embargo, lo cierto es que la invitación al “diálogo supervisor” abre un frente delicadísimo para la DGSFP en múltiples posibles casos: (a) supuestos donde se haya llevado a cabo el “diálogo supervisor” y, finalmente, no se haya autorizado la operación sometida al criterio de la DGSFP, ya en fase del procedimiento administrativo estricto; (b) supuestos donde el interesado acepte la vía del “diálogo supervisor” pero a la vez recurra bajo el derecho que le otorga el artículo 46.3 de la LJCA; (c) supuestos donde el interesado ignore la vía del “diálogo supervisor” y presente el expediente bajo el cauce legalmente previsto, y donde el expediente se resuelva desfavorablemente.

En todos estos casos, la situación del regulador no puede ser más inquietante, pues además de todo lo que concierne a la vía de hecho, puede darse cauce a un amplísimo debate en el que pueden reprocharse -incluso- perjuicios muy graves para los interesados.

Impacto de la inteligencia artificial en el sector asegurador tras la aprobación de la “IA Act”



Raúl Rubio
Socio de Propiedad Intelectual y Tecnología

El impacto regulatorio y jurídico de la Inteligencia Artificial (IA) en el sector asegurador es un tema de creciente interés y complejidad. La reciente aprobación del Reglamento europeo de IA (“IA Act”) marca un hito importante en la forma en que la IA se integrará y regulará en diversos sectores, incluido el de seguros.

La IA tiene el potencial de transformar el sector asegurador al mejorar la eficiencia y la efectividad, al tiempo que puede conducir a la aparición de nuevos servicios y participantes en el mercado, aumentando así el dinamismo de este negocio. La IA permitirá otorgar un mayor protagonismo al consumidor, permitiendo el diseño

the person concerned has only three options: (i) acquiesce to an unlawful, unforeseen procedure and consent to an extension of the legally established procedural period, (ii) ignore the Administration’s request that the documentation of the administrative file be provided informally and, therefore, proceed with the request electronically in accordance with the established procedure, or (iii) appeal in contentious-administrative proceedings, ex Article 46.3 of the LJCA, at the same time as the Administration enables a communication channel for the “early dialogue” outside the legal provisions for obtaining the authorisation in question.

The parties involved (in our case, those involved in the insurance sector) are placed in a difficult situation when faced with this request for “early dialogue”, which usually leads them to accept, as a lesser evil, the carrying out of a procedure not provided for under the law. This means that in any contract or agreement that is subject to conditions precedent or the performance of specific actions for its fulfilment, the ordinary deadlines of the LOSSEAR and the ROSSEAR for the resolution of all kinds of authorisation files are increased by an indeterminate, artificial period during which the file will be in a sort of legal limbo.

However, the fact is that the invitation to “early dialogue” opens up a very delicate issue for the DGSFP in many possible cases: (a) cases in which the “early dialogue” has taken place and, ultimately, the transaction subject to the DGSFP’s criteria has not been authorised, despite already being in the strict administrative procedure phase; (b) cases in which the interested party accepts the “early dialogue” route but at the same time appeals under the right granted by Article 46.3 of the LJCA, and (c) cases in which the interested party ignores the “early dialogue” route and presents the file under the legally established channel, and where the file is resolved unfavourably.

In all these cases, the situation of the regulator could not be more worrying, as in addition to all that concerns the de facto channel, a very broad debate may arise in which the interested parties may even be blamed for very serious harm.

The impact of artificial intelligence on the insurance sector following the approval of the “AI Act”



Raúl Rubio
IP and Technology Partner at Pérez-Llorca

The regulatory and legal impact of Artificial Intelligence (AI) on the insurance sector is a topic of growing interest and complexity. The recent approval of the European Artificial Intelligence Act (the “AI Act”) marks an important milestone in the way that AI will be integrated and regulated in various sectors, including the insurance sector.

AI has the potential to transform the insurance sector by improving efficiency and effectiveness, while potentially leading to the emergence of new services and market participants, thereby increasing the dynamism of this industry. AI will enable greater consumer empowerment, allowing the design of

de productos que se ajustan más precisamente a las necesidades y preferencias individuales. Estos cambios conllevarán una experiencia de cliente mejorada y una mayor satisfacción.

Junto a las oportunidades que puede ofrecer esta tecnología, también existen riesgos a tener en cuenta. La IA puede llevar a una mayor dependencia de los proveedores de servicios de terceros, como los proveedores de servicios en la nube. Es por ello por lo que, las políticas de externalización de las entidades del sector serán fuertemente escrutadas por los supervisores.

La Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIO-PA) ha presentado recomendaciones específicas para el sector de seguros de cara a garantizar un marco ético y confiable en el uso de la IA⁴. Esto incluye la consideración de servicios directamente relacionados con las actividades de seguros o auxiliares y la gestión de riesgos de los clientes.

La gestión de datos masivos (“big data”), la privacidad, la seguridad de los datos y la ética son aspectos críticos que las empresas deben abordar. El importante crecimiento que se prevé en el uso de estas tecnologías, junto a la mayor carga regulatoria y presión sancionadora, podrá derivar en incumplimientos de la normativa, tanto materiales como formales, con el potencial de ocasionar daños económicos y reputacionales a las organizaciones.

El Reglamento Europeo de IA, aprobado finalmente, tras intentos de negociaciones, por el Parlamento Europeo el 13 de marzo de 2024, aspira a controlar la innovación tecnológica en este ámbito para proteger los derechos fundamentales y la seguridad de los ciudadanos europeos. A través de un enfoque basado en el riesgo, este reglamento clasifica los sistemas de IA en categorías según el nivel de riesgo que representan, estableciendo regulaciones más estrictas para aquellos considerados de alto riesgo.

Los sistemas de IA que presenten un riesgo inaceptable, como la manipulación cognitiva o la puntuación social, estarán prohibidos. Mientras tanto, los sistemas considerados de alto riesgo, que podrían incluir algunos utilizados en el sector asegurador, requerirán de una evaluación de conformidad rigurosa antes de su despliegue, del diseño y documentación de modelos de gestión de riesgos y de gobernanza y, cuando esté operativo por parte de los reguladores, de la obtención de certificaciones y de comunicaciones a registros públicos.

El nuevo reglamento incorpora un conjunto de principios básicos aplicables a todos los sistemas de IA: la intervención y vigilancia humanas; la solidez y seguridad técnicas; la privacidad y gobernanza de datos; la transparencia; la diversidad, no discriminación y equidad; y el bienestar social y medioambiental. Las compañías del sector asegurador deberán realizar evaluaciones de impacto para garantizar el cumplimiento de estos principios como parte de su ciclo de desarrollo de IA, asegurando que sus sistemas no solo sean técnicamente viables sino también éticamente justificables.

En definitiva, aunque para un ámbito distinto, será necesario acometer un proceso de adecuación a la normativa equiparable en

products that are more precisely tailored to individual needs and preferences. These changes will lead to an improved customer experience and greater satisfaction.

Alongside the opportunities that this technology can offer, there are also risks to consider. AI can lead to an increased reliance on third-party service providers, such as cloud service providers. As a result, the outsourcing policies of industry players will be heavily scrutinised by supervisors.

The European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) has put forward specific recommendations for the insurance sector to establish an ethical and trustworthy framework for the use of AI⁴. This includes consideration of services directly related to insurance or ancillary activities and customer risk management.

The management of big data, privacy, data security and ethics are critical issues that companies must address. The expected significant growth in the use of these technologies, coupled with the increased regulatory burden and sanctioning pressure, may result in both material and formal breaches of regulations, with the potential to cause economic and reputational damage to organisations.

The European AI Act, which, after intense negotiations, was finally adopted by the European Parliament on 13 March 2024, aims to control technological innovation in this area in order to protect the fundamental rights and security of European citizens. Through a risk-based approach, the Act sorts AI systems into categories according to the level of risk they pose, establishing stricter regulations for those considered high risk.

AI systems that present an unacceptable risk, such as cognitive manipulation or social scoring, will be banned. Meanwhile, systems considered high risk, which could include some used in the insurance sector, will require a rigorous compliance assessment prior to deployment, the design and documentation of risk management and governance models, and, where made operational by regulators, the granting of certifications and submissions to public registries.

The new Act incorporates a set of core principles applicable to all AI systems: human agency and oversight; technical robustness and safety; privacy and data governance; transparency; diversity, non-discrimination and fairness; and societal and environmental well-being and accountability. Companies in the insurance sector will need to conduct impact assessments to ensure compliance with these principles as part of their AI development cycle, ensuring that their systems are not only technically feasible but also ethically justifiable.

In short, although it applies to a different area, it will be necessary to undertake a process of adaptation to the Act compa-

⁴ Artificial intelligence governance principles: towards ethical and trustworthy artificial intelligence in the European insurance sector. A report from EIOPA's Consultative Expert Group on Digital Ethics in insurance.

⁴ Artificial intelligence governance principles: towards ethical and trustworthy artificial intelligence in the European insurance sector. A report from EIOPA's Consultative Expert Group on Digital Ethics in insurance.

esfuerzo a lo que en su día supuso la adaptación al Reglamento Europeo de Protección de Datos. El legislador nos da en teoría dos años de *vacatio legis* para supuestamente tener tiempo de implementar estos cambios, aunque la Comisión europea ya ha puesto en marcha lo que han llamado el Pacto sobre IA⁵, buscando el compromiso voluntario de la industria de anticiparse en el cumplimiento de la *IA Act* y comenzar a aplicar sus requerimientos antes del plazo legal. Este enfoque de la Comisión, donde las organizaciones harán declaraciones públicas de compromiso, es muy probable que se convierta en una herramienta de competitividad comercial que acabe de facto obligando, especialmente a las grandes empresas, a acelerar sus procesos de adecuación a la nueva normativa, a riesgo de sufrir comercial y reputacionalmente frente a sus competidores.

Pero el reglamento de IA no llega solo, viene acompañado de un importante conjunto de normas que suponen un incremento significativo de la carga regulatoria en el ámbito digital y tecnológico (DMA, DSA, DGA, DA, eIDAS 2, DORA, NIS2, ...). A pesar de que toda esta nueva regulación de la actividad digital, buscando los aspectos positivos, se podría pensar que el sector asegurador cuenta con cierta ventaja, debido a su larga historia de cumplimiento con regulaciones estrictas.

La seguridad y la gobernanza de las TIC son áreas que se beneficiarán de una mayor armonización entre los Estados miembros. La aplicación plena del Reglamento de Resiliencia Operativa Digital (DORA) en enero de 2025 consolidará aún más esta posición, facilitando la incorporación de tecnologías de IA de manera responsable.

En definitiva, para el sector asegurador, este marco legal ofrece tanto desafíos como oportunidades. Al abrazar los principios de responsabilidad, transparencia y ética en el uso de la IA, las aseguradoras no sólo pueden cumplir con estas nuevas regulaciones sino también liderar en la implementación de soluciones innovadoras centradas en el cliente. El papel proactivo en la adaptación a estas regulaciones no solo garantizará su cumplimiento, sino que también potenciará su competitividad y relevancia en la era digital.

En un entorno cada vez más tecnológico y regulado, es esencial que las áreas de negocio de las entidades del sector asegurador se apoyen en la función legal y trabajen juntos con un enfoque estratégico para navegar este complejo paisaje regulatorio, garantizando que, ante esta transformación radical que se avecina, sean de los que no naufraguen e incluso lleguen los primeros a buen puerto.

Entrevista a Francisco Ruiz Risueño



Joaquín Ruiz Echaury
Socio de Seguros y Reaseguros de Pérez-Llorca

Francisco Ruiz Risueño es uno de esos hombres que contribuyeron al éxito de nuestra Transición Democrática, y a los que tanta admiración y reconocimiento nos cabe brindar por su esfuerzo, inteligencia y trabajo. Brillante jurista, Premio Extraordinario de Carrera y Abogado del Estado, se integró desde su Albacete natal en la

able to the effort required by the adaptation to the European Data Protection Regulation. In theory, the legislature is giving us two years of *vacatio legis* to have time to implement these changes, although the European Commission has already launched what it has called the AI Pact⁵, seeking the voluntary commitment of the industry to anticipate compliance with the AI Act and begin the application of its requirements before the legal deadline. This approach by the Commission, where organisations will make public statements of commitment, is very likely to become a tool of commercial competitiveness that will effectively force organisations, especially large companies, to accelerate their compliance processes, at the risk of suffering commercially and reputationally vis-à-vis their competitors.

But the AI regulations do not arrive alone; they are accompanied by an important set of rules that represent a significant increase in the regulatory burden in the digital and technological sphere (DMA, DSA, DGA, DA, eIDAS 2, DORA, NIS2, among others). Despite this new regulation of digital activity, when looking for the positive aspects, one might think that the insurance sector has a certain advantage, due to its long history of compliance with strict regulations.

ICT security and governance are two areas that will benefit from further harmonisation among Member States. The full implementation of the Digital Operational Resilience Act (DORA) in January 2025 will further consolidate this position, facilitating the responsible incorporation of AI technologies.

Ultimately, for the insurance sector, this legal framework offers both challenges and opportunities. By embracing the principles of responsibility, transparency and ethics in the use of AI, insurers can not only comply with these new regulations but also lead in the implementation of innovative customer-centric solutions. A proactive role in adapting to these regulations will not only ensure compliance but also enhance their competitiveness and relevance in the digital age.

In an increasingly technological and regulated environment, the business areas of insurance entities must rely on legal professionals and work together with a strategic approach to navigate this complex regulatory landscape, ensuring that, in the face of the radical transformation ahead, they are among those who do not get shipwrecked and are even the first to reach a safe harbour.

Interview with Francisco Ruiz Risueño



Joaquín Ruiz Echaury
Insurace and Reinsurance Partner at Pérez-Llorca

Francisco Ruiz Risueño is one of those men who contributed to the success of our Democratic Transition, and to whom we owe a considerable amount of admiration and recognition for his effort, intelligence, and work. A brilliant jurist, a winner of the Extraordinary Career Prize and a State Lawyer, he joined the

⁵ Pacto de IA.

⁵ AI Pact.

Unión de Centro Democrático (UCD). Son innumerables los hitos y logros de su carrera profesional, en la que ha desempeñado roles académicos, doctrinales, profesionales y ejecutivos de gran lustre, destacando a efectos de nuestro Sector Asegurador que junto a posiciones como Secretario General de compañías de seguros como CCM Vida y Pensiones o la argentina La Equitativa del Plata, o Vicepresidente de Mapfre, **fue el ponente por la UCD en el debate parlamentario celebrado entre 1979 y 1980 sobre el entonces Proyecto de Ley de Contrato de Seguro**, materia sobre la que nos honra contar con él para tener su visión sobre ciertas cuestiones siempre de actualidad en la LCS.

¿Qué recuerdos tienes del debate parlamentario de la Ley de Contrato de Seguro?

Volver la vista atrás para recordar la época de la Transición y, en particular, los debates en el Senado de la Ley de Contrato de Seguro, es una amable invitación, que agradezco, a volver a la España de la concordia y del acuerdo entre diferentes. La Ley de Contrato de Seguro no fue una excepción al ambiente de entendimiento entonces existente. La lectura del diario de sesiones pone de manifiesto los términos respetuosos en el que se desarrollaron los debates y se abordaron las legítimas discrepancias.

No puedo evitar un emocionado recuerdo para mis compañeros de ponencia y de grupo parlamentario Manuel Broseta Pont y Emilio Marín Villa. Igualmente recuerdo a los senadores del grupo socialista Ballesteros de Rodrigo y Lizón, así como a Nadal Company, del grupo Cataluña, Democracia y Socialismo. Los debates se desarrollaron en términos estrictamente técnicos y jurídicos, partiendo del pleno convencimiento de que era necesario incorporar los mecanismos e instrumentos necesarios que lograsen el necesario equilibrio y protección entre aseguradores y asegurados, partiendo de la base de que nos encontrábamos ante un contrato donde el elemento clave era y es “el alea”, que constituye su razón de ser y su fundamento.

Además, todos éramos conscientes de que, con la aprobación de dicha ley, estábamos derogando las normas que sobre tan importante materia se contenían en dos monumentos jurídicos del siglo XIX, el Código civil y el Código de comercio. Y fuimos especialmente cuidadosos al abordar tan importante tarea. Los principios que conformaron la ley tienen hoy, 44 años después, plena vigencia. Creo que entre todos elaboramos una ley perdurable en el tiempo, que es la prueba del trabajo bien hecho.

Union of the Democratic Centre (Unión de Centro Democrático) (UCD) in his native Albacete. There have been countless milestones and achievements in his professional career, in which he has played academic, judicial, professional, and executive roles with great distinction. He had a notable career in our insurance sector, in which he held positions such as the Secretary General of CCM Vida y Pensiones and the Argentinean company, La Equitativa del Plata, as well as Vice-President of Mapfre. **In addition, he was the speaker for the UCD in the parliamentary debate held between 1979 and 1980 on the then Draft Insurance Contract Law**, a subject in respect of which we are honoured to have him share his views on certain issues that are always topical in the LCS.

What memories do you have of the parliamentary debate on the Insurance Contract Law?

Looking back on the transition period and, in particular, the debates on LCS in the Senate, is a kind invitation, for which I am grateful, to return to the Spain of harmony and agreement between different people. The LSC was no exception to the atmosphere of understanding that existed at the time. A reading of the session diary shows the respectful terms in which the debates took place and how legitimate disagreements were dealt with.

I cannot avoid a moving memory of my colleagues, Manuel Broseta Pont and Emilio Marín Villa. I also remember the senators from the socialist group, Ballesteros de Rodrigo and Lizón, as well as Nadal Company, from the group, Catalonia, Democracy and Socialism. The debates were conducted in strictly technical and legal terms, based on the full conviction that it was necessary to incorporate the necessary mechanisms and instruments to achieve the necessary balance and protection between insurers and insured parties, on the basis that we were dealing with a contract in which the key element was and is “the alea”, which is its *raison d'être* and its foundation.

Moreover, we were all aware that, with the approval of this law, we were repealing the rules on such an important matter contained in two legal monuments of the 19th century, the Civil Code and the Commercial Code. And we were particularly careful in tackling such an important task. The principles that shaped the law are fully valid today, 44 years later. I believe that together we have produced a law that will stand the test of time, which is the proof of a job well done.



¿Cuál crees que era el fundamento del concepto de las cláusulas limitativas?

En mi opinión, si bien hay una razón o fundamento común aplicable a todos los supuestos que se plantean, es preciso analizar individualmente las diferentes situaciones (“caso a caso”) que se produzcan para encontrar el fundamento inmediato de la incorporación de dichas cláusulas.

En efecto, las impropriadamente denominadas cláusulas limitativas de los derechos del asegurado traen su causa de la doble naturaleza del contrato de seguro, de un lado, de su “naturaleza aleatoria”, de otro, de su carácter de “contrato de adhesión”. En virtud de su condición de contrato aleatorio, en el que la realización del riesgo cubierto no depende de la voluntad de las partes, sino de un suceso futuro e incierto, que, o bien no llega a producirse, o bien, si se produce, no sabemos ni cómo ni cuándo, se permite introducir aquellas cláusulas que, más que limitar, condicionan el derecho del asegurado a percibir la correspondiente indemnización, cuando el asegurado lleva a cabo una conducta (por ejemplo, ingesta de alcohol) que puede aumentar la probabilidad de que el siniestro se produzca, o cuando se producen fenómenos naturales desacomunados, que aumentan la posibilidad o gravedad del daño (por ejemplo, huracán, terremoto en zonas no habituales). Si el seguro cubriese esos riesgos se produciría un gravamen injustificado para el asegurador, por alteración de la esencia aleatoria del contrato, lo que exigiría un aumento considerable del importe de las primas, que haría el seguro excesivamente costoso y, por tanto, inviable.

En virtud de su carácter de contrato de adhesión elaborado por el asegurador, la ley exige a este que las cláusulas limitativas figuren descritas con sencillez y claridad para el asegurado, que estén destacadas y resaltadas de modo que las hagan fácilmente identificables y, además, que las mismas sean especialmente aceptadas con su firma por el asegurado. La jurisprudencia sobre la materia es reiterada.



¿Piensas que ese concepto de cláusulas limitativas deja de tener sentido cuando surge la legislación general de protección de consumidores de los años ochenta y noventa del siglo XX?

Si bien es cierto que la nueva legislación sobre protección y defensa de los consumidores pretende la defensa de estos en un mercado cada vez más competitivo y regulado, y de que, por tanto, muchas de sus disposiciones y principios son trasladables a los asegurados, no puede olvidarse que esta legislación está referida a todos los consumidores sin distinción, lo que configura a dicha ley como

What do you think was the rationale behind the concept of limiting clauses?

In my opinion, although there is a common reason or basis applicable to all the cases that arise, it is necessary to individually analyse the different situations (“case by case”) that arise in order to find the immediate basis for the incorporation of such clauses.

In effect, the improperly named clauses limiting the rights of the insured arise from the dual nature of an insurance contract, on one hand, from its “random nature”, on the other hand, from its nature as a “contract of adhesion”. By virtue of its status as an aleatory contract, in which the realisation of the risk covered does not depend on the will of the parties, but on a future and uncertain event, which either does not occur, or, if it does occur, we do not know how or when, it is permitted to introduce clauses which, rather than limiting, qualify the right of the insured to receive the corresponding compensation, when the insured person engages in conduct (for example, drinking alcohol) that may increase the probability of the claim occurring, or when unusual natural phenomena occur that increase the possibility or seriousness of the damage (for example, hurricanes or earthquakes in unusual areas). If the insurance were to cover these risks, it would place an unjustified burden on the insurer, by altering the random essence of the contract, which would require a considerable increase in the amount of the premiums, which would make the insurance excessively costly and, therefore, unviable.

Due to its nature as a contract of adhesion prepared by the insurer, the law requires that the limiting clauses are described simply and clearly for the insured, that they are emphasised and highlighted so that they are easily identifiable and, furthermore, that they are specifically accepted by the insured with his signature. The jurisprudence on the subject has been reiterated.



Do you think that this concept of limiting clauses ceased to make sense when the general consumer protection legislation of the 1980s and 1990s came into being?

While it is true that the new legislation on the protection and defence of consumers aims to defend consumers in an increasingly competitive and regulated market, and that, therefore, many of its provisions and principles are transferable to the insured, it should not be forgotten that this legislation refers to all consumers without distinction, which makes this

una ley de carácter general, mientras que la ley 50/1980 es una ley especial y exclusivamente referida al mundo del seguro privado. El principio de que la ley general no deroga a la ley especial prima en este caso y, en mi opinión, las cláusulas limitativas forman parte inseparable de la legislación propia y específica sobre la materia. Otra cosa es que, en determinadas cuestiones, la legislación general pueda servir de complemento de la legislación especial y, por tanto, trasladable a esta en aquellas cuestiones que pudieran servir de mayor protección a los asegurados en su condición, porque lo son, de consumidores.

Sé que la cuestión que me planteas es una cuestión recurrente y que es objeto de debate, pero me inclino por la interpretación de la norma en los términos que acabo de exponer, máxime cuando en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios no se hace ninguna referencia concreta al contrato de seguro privado que pueda interpretarse en sentido contrario.

¿Sigue siendo lógico mantener un interés moratorio del veinte por ciento, habida la cuenta de que era una penalidad sustitutiva de daños y perjuicios, y rara vez estos pueden ascender a un importe tan elevado?

El contrato de seguro privado, ya lo he señalado, tiene dos notas características que hacen del mismo una figura contractual especial y distinta a las demás relaciones contractuales, ya que, no solo es un contrato de adhesión, sino que además es un contrato aleatorio, en el que el asegurado abona la prima desde el momento de la firma (supuesto habitual), mientras que el asegurador queda obligado a reparar y compensar los efectos del siniestro solo cuando el mismo se produce, si es que llegase a producirse. Por ello, no parece razonable, cuando se aborda esta importante cuestión, hacer comparaciones con otros sectores que no reúnen estas dos notas.

Estas notas hicieron que en 1980 nos planteáramos la conveniencia de establecer un mecanismo que obligase al asegurador a abonar una cláusula penal para el supuesto de retraso culpable en favor de quien con el abono de las primas (el asegurado) ya había cumplido con su obligación.

Sobre esta base y punto de partida, había que resolver dos cuestiones, de un lado, establecer un plazo razonable para que el asegurador cumpliera sin recargo alguno con el pago de la indemnización. De otro, fijar la cuantía del recargo o pena a satisfacer. El plazo se fijó en 3 meses desde que ocurriese el siniestro. La cuantía, solo en caso de retraso culpable, se fijó en el 20% de la cantidad a abonar por el asegurador.

Es sobre esos postulados sobre los que hay que abordar la posible rebaja del porcentaje referido. Creo que las aseguradoras españolas, cuyo nivel técnico y eficacia, es incuestionable (lo digo con conocimiento de causa, ya que tuve el honor de ser vicepresidente de Mapfre), han demostrado a lo largo de todos estos años la viabilidad de la norma. En cualquier caso, la modificación de esta, debe ser objeto de un análisis profesional sincero, ya que la reducción del porcentaje podría, a la larga, beneficiar a las empresas aseguradoras incumplidoras y menos solventes y perjudicar a los asegurados. Habría que hacer un cálculo financiero adecuado para actualizar al tiempo del pago del siniestro la cantidad verdaderamente satisfecha por el asegurador.

law a general law, whereas Law 50/1980 is a special law that refers exclusively to the world of private insurance. The principle that the general law does not derogate from the special law prevails in this case and, in my opinion, the restrictive clauses form an inseparable part of the specific legislation on the matter. A further point is that, on certain issues, the general legislation may serve to supplement the special legislation and, therefore, may be transferred to the latter regarding those issues that could provide greater protection for insured persons in their capacity, because they are consumers.

I know that the question you raise is a recurring issue and is the subject of debate, but I am inclined towards the interpretation of the rule in the terms I have just explained, especially when the revised text of the General Law for the Defence of Consumers and Users does not make any specific reference to a private insurance contract that could be interpreted to the contrary.

Is it still logical to maintain a default interest rate of twenty percent, given that it was a penalty in lieu of damages, and damages can rarely reach such a high amount?

Private insurance contracts, as I have already pointed out, have two characteristics that make them a special contractual case and different from other contractual relations, since not only are they contracts of adhesion, but they are also aleatory contracts, in which the insured party pays the premium from the moment of signing (a usual scenario), while the insurer is obliged to rectify and compensate the effects of the loss only when the loss occurs, if it occurs at all. Therefore, it does not seem reasonable, when dealing with this important issue, to make comparisons with other sectors that do not meet these two notes.

In 1980, these notes led us to consider the convenience of establishing a mechanism that would oblige an insurer to pay a penalty clause in the event of culpable delay in favour of the person who, with the payment of the premiums (the insured) had already fulfilled their obligation.

On this basis and starting point, two issues had to be resolved, firstly, the establishment of a reasonable period of time for the insurer to comply with the payment of the indemnity without any surcharge. Secondly, the amount of the surcharge or penalty to be paid had to be established. The deadline was set at 3 months from the occurrence of the claim. The amount, only in the event of culpable delay, was set at 20% of the amount to be paid by the insurer.

It is on these grounds that the possible reduction of the percentage referred to must be addressed. I believe that Spanish insurers, whose technical level, and efficiency is unquestionable (I say this with full knowledge of the facts, as I had the honour of being vice-president of Mapfre), have demonstrated over all these years the viability of the rule. In any case, the amendment of this rule should be the object of sincere professional analysis, since the reduction of the percentage could, in the long run, benefit the defaulting and less solvent insurance companies and harm the insured. A proper financial calculation would have to be made to update the amount actually paid by an insurer at the time of payment of the claim.

¿Cómo crees que sería posible abordar una reforma de la Ley de Contrato de Seguro en el actual contexto parlamentario?

Así como en 1980 el contexto parlamentario, no solo era diferente en cuanto a la representación numérica de los grupos parlamentarios, con mayorías estables, sino también en cuanto al modo y forma de abordar las diferentes cuestiones que se planteaban, con esa actitud de colaboración ya reseñada al principio, me temo que en estos momentos, en los que la confrontación es el modo habitual de legislar y donde, además, se produce una excesiva fragmentación del Parlamento, incluidos los grupos que sustentan al propio Gobierno, ni es aconsejable ni posible abordar una reforma o adaptación de la actual ley en aquellas cuestiones que, trascurridos más de cuarenta años, sea necesaria modificar.

La importancia económica y social del seguro privado es incuestionable y requiere sosiego y tranquilidad para llevar a cabo una posible reforma, sosiego y tranquilidad que no se dan en las circunstancias actuales.

Uma revolução na governação das sociedades gestoras de fundos de pensões?



Inês Palma Ramalho
Sócia de Bancario y Seguros de Pérez-Llorca

Em meados de maio de 2024, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (“ASF”) colocou em consulta pública um projeto de norma regulamentar sobre o sistema de governação das entidades gestoras de fundos de pensões (a Consulta Pública n.º 4/2024).

O projeto normativo é extenso – apresentando um total de 123 artigos – e visivelmente ambicioso, focando-se na definição de um quadro de governança corporativa capaz de oferecer melhores garantias de gestão sã e prudente destas instituições e, em consequência, proteger adequadamente os associados, contribuintes, participantes e beneficiários destes fundos.

Devidamente enquadrado no regime jurídico da constituição e do funcionamento dos fundos de pensões e das entidades gestoras de fundos de pensões, conforme aprovado pela Lei n.º 27/2020, de 23 de julho (“RJFP”), esta norma regulamentar consagra várias novidades interessantes e que indiciam uma maior aproximação àquela que tem sido a técnica e prática supervisa de outros reguladores financeiros em Portugal.

Entre as muitas inovações da norma regulamentar que poderíamos destacar, optamos por elencar as seguintes:

- » **O reforço da estrutura de supervisão interna destas entidades**, refletido na manutenção da possibilidade de escolha do modelo de governança por estas instituições, desde que o mesmo inclua um sistema de gestão de riscos forte, liderado por uma função de gestão de riscos independente, e um sistema de controlo interno mais robusto, cuja responsabilidade recai também sobre a função de verificação de cumprimento.

How do you think it would be possible to tackle a reform of the LSC in the current parliamentary context?

Just as in 1980, the parliamentary context was not only different in terms of the numerical representation of the parliamentary groups, with stable majorities, but also in terms of the way and manner of tackling the different issues that arose, with that attitude of collaboration already mentioned at the outset. I am afraid that at the present time, in which confrontation is the customary way of legislating and where, furthermore, there has been an excessive fragmentation of Parliament, including the groups that support the Government itself, it is neither advisable nor possible to tackle a reform or adaptation of the current law on those issues that, after more than forty years, must be amended.

The economic and social importance of private insurance is unquestionable and requires calmness and composure to carry out a possible reform, calmness and composure that is not present in the current circumstances.

A revolution in the governance of pension fund management companies?



Inês Palma Ramalho
Banking and Insurance Partner at Pérez-Llorca

In mid-May 2024, the Portuguese Insurance and Pension Funds Supervisory Authority (“ASF”) put out for public consultation a new draft regulatory standard on the governance system of pension fund management entities (Public Consultation no. 4/2024).

The draft regulation is extensive – with a total of 123 articles – and visibly ambitious, focusing on the definition of a corporate governance framework capable of offering better guarantees of sound and prudent management of these institutions and, consequently, adequately protecting members, payers, participants, and beneficiaries of these funds.

Stemming from the legal regime for the incorporation and management of pension funds and of pension fund management entities, as approved by Law No. 27/2020, of 23 July (“RJFP”), this regulatory standard enshrines several interesting innovations evidencing an approximation to what has been the supervisory techniques and practices of other financial regulators in Portugal.

Among the many new features of this regulatory standard that we could highlight, we chose to focus on the following:

- » **The strengthening of the internal supervisory structure of these entities**, reflected in the latter being able to choose its governance model, provided that it entails a strong risk management system, led by an independent risk management function, and a more robust internal control system, whose responsibility also falls on the compliance monitoring function.

A par do reforço destas funções de controlo interno, as entidades gestoras de fundos de pensões passam a contar obrigatoriamente com uma função autónoma de auditoria interna a que se soma uma função atuarial, sempre que estejamos perante entidades que giram fundos de pensões que financiem planos de benefício definido ou planos de contribuição definida cujas pensões sejam pagas diretamente através de um fundo de pensões.

E, naturalmente, não se dispensa a presença e o papel nestas estruturas do depositário, do revisor oficial de contas, do atuário responsável e da comissão de acompanhamento do plano de pensões.

- » A assumida importância de **uma atuação correta da entidade no âmbito da realização de operações**, nomeadamente no que diz respeito à **prevenção de conflitos de interesses, à autoavaliação do risco e a temas remuneratórios**.

Em particular, o projeto de norma regulamentar inova quanto ao dever de as sociedades gestoras de fundos de pensões disporem de regras específicas sobre prevenção, comunicação e sanção de situações de conflitos de interesses (nos termos do artigo 114.º (3) do RJFP), seja num contexto mais generalizado de deveres de conduta (e com impacto nos respetivos códigos de atuação), seja a propósito da aprovação de operações que envolvam potenciais conflitos de interesses (neste caso, adaptando a disciplina já estava previsto na Norma Regulamentar n.º 7/2020-R, de 16 de junho).

Já quanto à autoavaliação de risco, o projeto de norma regulamentar aprofunda os deveres das entidades nesta matéria, aumenta os deveres de reportes correspondentes à ASF e aprofunda o regime de responsabilidade dos dirigentes destas entidades por falhas nesta área.

Finalmente, quanto à remuneração, o projeto da norma regulamentar parte da disciplina já prevista na Circular n.º 6/2010, de 1 de abril, e procede a uma atualização aprofundada dos princípios gerais e das regras aplicáveis à política de remuneração e às práticas remuneratórias deste tipo de entidades, em particular no que diz respeito aos critérios para a fixação e atribuição de uma remuneração variável. Cria-se, ainda, uma nova metodologia para identificar os trabalhadores da entidade gestora cujas atividades profissionais podem ter um impacto material no perfil de risco da entidade.

- » O foco na **conduta e cultura organizacional** das entidades gestoras de fundos de pensões, particularmente potenciada por uma **maior responsabilização dos membros do órgão de administração destas entidades, a par de um reforço do regime de proteção do denunciante e da comunicação de irregularidades (whistleblowing)**. O projeto de norma regulamentar visa garantir, com base numa perspetiva verdadeiramente holística, o envolvimento dos dirigentes destas entidades, atribuindo-lhes uma (muito) maior *accountability* por eventuais falhas decorrentes de uma má organização da entidade gestora, por incapacidade em evitar situações conflituantes, pela falta de políticas ou procedimentos escritos alinhados com a estratégia de negócio da instituição, pela inexistência de planos de contingência ou deficiências na identificação de ris-

In addition to these internal control functions, pension fund management entities must now have an autonomous internal audit function, in addition to an actuarial function, whenever we are dealing with entities that manage pension funds that finance defined benefit plans or defined contribution plans whose pensions are paid directly through a pension fund.

And, of course, the presence and role in these structures of the depositary, the statutory auditor, the actuary in charge and the monitoring committee of the pension plan are not dispensed with.

- » The assumed importance of **ensuring a proper performance in the context of carrying out operations**, namely with what concerns **prevention of conflicts of interest, self-assessment risks and remuneration issues**.

In particular, the draft regulation creates a new duty for pension fund management companies to have specific rules on the prevention, communication and mitigation of conflicts of interests' events (pursuant to article 114 (3) of the RJFP), either in a more generalized context of duties of conduct (and with an impact on the respective codes of conduct), or regarding the approval of operations involving potential conflicts of interests (in this case, adapting the discipline that was already provided for in Regulatory Standard no. 7/2020-R, of 16 June).

As for the self-assessment risk, the draft regulatory standard deepens the entities' duties in this matter, increasing the reporting duties to the ASF and deepening the liability regime of the directors of these entities for failures originated in this area.

Finally, as to remunerations, the draft regulatory standard is based on the discipline provided for in Circular no. 6/2010, of 1 April, and carries out an in-depth update of the general principles and rules applicable to the remuneration policy and remuneration practices of this type of entities, in particular with regard to the criteria for setting and awarding variable remuneration. A new methodology is also defined with a view to identify the employees of the management entity whose professional activities may have a material impact on the risk profile of said entity.

- » The focus on **the conduct and organisational culture** of pension fund management entities, particularly enhanced by an even greater accountability of the members of the management body of these entities, along with a strengthening of the **whistleblower protection regime**. The draft regulatory standard adopts a truly holistic perspective and aims to ensure the involvement of the directors of these entities, assigning to them greater accountability for any failures resulting from a poor organization of the management entity, for the inability to avoid conflicting situations, for the lack of written policies or procedures aligned with the institution's business strategy, for the lack of contingency plans or deficiencies in the identification of risks, among many other events that

cos, entre tantos outros eventos passíveis de gerar consequências para os dirigentes da instituição. Não surpreende, portanto, que a norma regulamentar traga igualmente para a luz do dia a necessidade de se operacionalizar, de forma efetiva, os meios de receção, tratamento e arquivo de irregularidades participadas à instituição no âmbito do regime de whistleblowing cujo desenho já se encontrava previsto na Norma Regulamentar n.º 4/2022-R, de 26 de abril, e no artigo 117.º (6) e (7) do RJFP

Os temas tratados pelo projeto de norma regulamentar são extensos e a lista de tópicos a apresentar não é exaustiva, como não podia deixar de ser. É também por conta desta extensão – e do carácter inovador de algumas soluções – que se espera ainda algumas mudanças importantes ao projeto, algures no 2.º semestre de 2024.

Até lá, deixa-se a nota que a versão atual do projeto de norma regulamentar tem prevista uma *vacatio legis* de uns curtos 30 (trinta) dias após a data da respetiva publicação para a grande maioria das suas normas e que se recomenda ao setor dos fundos de pensões que se mantenha atento ao que pode vir a ser um período particularmente curto de grandes adaptações.

Call me MGA



Joaquín Ruiz Echaury
Socio de Seguros y Reaseguros de Pérez-Llorca

En su Informe sobre la aplicación de la IDD de 6 de enero de 2022 (“*Report on the application of the Insurance Distribution Directive*”), EIOPA recoge una entrevista con el Profesor Dr. Pierpaolo Marano, en la que alude a los Managing General Agents (MGAs), como una tendencia emergente que favorece el negocio transfronterizo de las aseguradoras, en la que el estudioso entiende que las regulaciones actuales no captan las peculiaridades de las actividades de los MGAs.

Ese mismo año 2022, EIOPA se volvió a referir directamente a los MGAs en su revisión con los supervisores nacionales sobre externalización (“*Peer Review on Outsourcing*”), señalando la necesidad de una regulación que desarrolle este concepto con vistas a asegurar la convergencia en la regulación y supervisión de este tipo de entidades⁶.

Conceptualmente, EIOPA lista en ese último estudio que los MGAs a la postre, son entidades con capacidad delegada sea para suscribir, sea para tramitar siniestros, o una combinación de ambas actividades. A partir de ahí, señala EIOPA que:

“Aunque no existe una definición formal de MGA en la legislación de la UE, generalmente se acepta y utiliza la siguiente. Las MGA son entidades que coordinan y proporcionan seguros y servicios relacionados con seguros a empresas de (re)seguros a cambio de una comisión.

Ejemplos de servicios proporcionados por los MGA son: (i) subcontratación con agentes independientes para la colocación de negocios; (ii) negociar comisiones; (iii) tramitación de reclama-

⁶ “EIOPA evaluará la necesidad de seguir desarrollando el concepto de MGA, con el fin de garantizar la convergencia en la regulación y supervisión de este tipo de entidades”.

may generate consequences for the institution’s leaders. It is therefore not surprising that the regulatory draft also brings to light the need to effectively operationalize the means of receiving, processing and archiving irregularities reported to the institution under the whistleblowing regime already provided for in Regulatory Standard no. 4/2022-R, of 26 April, and in article 117. (6) and (7) of the RJFP.

The topics covered by the draft regulatory standard are extensive and the list of issues to be presented is not exhaustive, as one might imagine. It is also because of this extension – and the innovative nature of some solutions – that some important changes to the project are still to be expected, sometime in the 2nd half of 2024.

Until then, it should be noted that the current version of the draft regulatory standard provides for a *vacatio legis* of a short thirty (30) days after the date of its publication (for the vast majority of its rules) and that the pension fund sector is advised to pay close attention to what may be a particularly short period of major adaptations.

Call me MGA



Joaquín Ruiz Echaury
Insurance and Reinsurance Partner at Pérez-Llorca

In its “*Report on the application of the Insurance Distribution Directive*” of 6 January 2022, EIOPA included an interview with the Law Professor, Dr Pierpaolo Marano, in which he refers to Managing General Agents (MGAs) as “*an emerging trend favouring the cross-border business of insurance companies*”. In this interview, Dr Marano explains “*that the current rules do not capture the peculiarities of the MGA’s activities*”.

Also in 2022, EIOPA again referred directly to MGAs in its “*Peer Review on Outsourcing*”, pointing out the need for regulation to further develop this concept with a view to ensuring convergence in the regulation and supervision of this type of entity⁶.

Conceptually, EIOPA states in the most recent study that MGAs are ultimately entities with the delegated capacity to either underwrite or handle claims, or a combination of both activities. From there, EIOPA notes that:

“Although there is no formal definition of MGAs in EU law, the following is generally accepted and used. MGAs are entities that coordinate and provide insurance and insurance-related services to (re)insurance undertakings for a commission.

Examples of services provided by MGAs are: (i) subcontracting with independent agents for the placement of business; (ii) negotiating commissions; (iii) claims han-

⁶ “EIOPA will assess the need to further develop the concept of MGA, in order to ensure convergence in the regulation and supervision of this type of entities”.

ciones (autoridad delegada por la aseguradora); (iv) emisión de pólizas (autoridad delegada por parte de la aseguradora); (v) tramitación de endosos; (vi) cobrar las primas de las pólizas; y (vii) otras tareas de administración de pólizas o gestión de reclamaciones. Algunos Estados miembros no reconocen en sus jurisdicciones el concepto de MGA”.

Como decimos, EIOPA se marca en esta revisión sobre prácticas de externalización en la Unión Europea la necesidad de aproximar el enfoque de los Estados miembros sobre los MGAs, recogiendo interesantes ejemplos, como Luxemburgo, que no reconoce en modo alguno esta figura, pero que admite que las aseguradoras domiciliadas en ese Estado recurran a ellos en sus operaciones fuera del Gran Ducado, aunque advirtiéndolas que esto puede suponer en la práctica que se considere que operan a través de sucursales, según la Comunicación Interpretativa de la Comisión Europea sobre libre prestación de servicios y derecho de establecimiento en el Sector Asegurador (“*European Commission interpretative communication on Freedom to provide services and the general good in the insurance sector*”). Resalta EIOPA la posición de los Países Bajos, con una encomiable guía específica aplicable al recurso a MGAs por aseguradores de seguros generales⁷.

Lo que transpira del análisis de EIOPA, en todo caso, es el considerar que existe una íntima ligazón entre el propio concepto de MGA y el régimen de externalización previsto bajo Solvencia II [artículos 13.28, 41, 49 y 50 de la Directiva Solvencia II, y 258.2, 274, 308.8, 351 y 359 del Reglamento Solvencia II]. En suma, delegar capacidades, notablemente de suscripción y gestión de siniestros a un agente, es externalización, y singularmente, si prestamos atención a las Directrices sobre Sistema de Gobernanza de EIOPA, versión extendida, es externalización de funciones críticas e importantes.

Todo este trasfondo europeo convive con la existencia, en ciertas regulaciones nacionales, de la figura de las agencias de suscripción, que serían el MGA por antonomasia. Existen en países como, por ejemplo, Italia –*la agenzia di sottoscrizione assicurativa*–, y desde luego existen en España, precursora en el mundo asegurador con la aparición de estas en la hoy derogada Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados. Sorprende ahora, en el presente contexto, lo pacífica que fue su entrada en nuestro sistema jurídico, y la apuesta inicial por enclavarlas en la regulación de mediación de seguros, algo que sigue lastrando a las agencias de suscripción en, por ejemplo, las consideraciones hechas sobre las mismas por la Dirección General de Tributos (cfr. Consultas V2135-12 o V3188-14, entre otras), hasta su traspaso a la normativa de ordenación a partir de 2011.

Lo cierto es que, desde un punto de vista de Derecho Comparado, los MGA no dejan de ser en muchos países simples agentes de seguros, ello por dos razones: una, el no existir, como en el caso italiano o español, otra categoría especial donde tengan mejor encaje, y dos, la ventaja que ofrece el enclavamiento en una figura mucho más común –la de agente de seguros–, a la hora de garantizarles la libertad de prestación de servicios o de establecimiento dentro de la Unión Europea. La agencia de suscripción española no puede establecer sucursales o prestar servicios sin establecimiento al no tener un reconocimiento equivalente en otros Estados miembros,

dling (delegated authority by the insurer); (iv) issuing policies (delegated authority by the insurer); (v) processing endorsements; (vi) collecting policy premiums, and (vii) other policy administration or claims management tasks. Some Member States do not recognise the concept of MGAs in their jurisdictions”.

As we have said, in this review of outsourcing practices in the European Union, EIOPA has highlighted the need to approximate the approach of the Member States to MGAs, including interesting examples, such as Luxembourg, which does not recognise this concept in any way, but which allows insurers domiciled in that State to use them in their transactions outside the Grand Duchy, although, they are warned that in practice this may mean that they are deemed to operate through branches, according to the “European Commission Interpretative Communication on Freedom to provide services and the general good in the insurance sector”. EIOPA highlights the position of the Netherlands, with commendable specific guidance applicable to the use of MGAs by general insurance insurers⁷.

The point of EIOPA's analysis, in any event, is to consider that there is a close link between the concept of the MGA itself and the outsourcing regime under Solvency II (Articles 13(28), 41, 49 and 50 of the Solvency II Directive, and 258(2), 274, 308(8), 351 and 359 of Solvency II Regulation). In short, delegating capabilities, notably underwriting and claims management, to an agent is outsourcing, and uniquely, if we pay attention to the extended version of the EIOPA Guidelines on System of Governance, it is the outsourcing of critical and important functions.

This European context coexists with the presence, in certain national regulations, of underwriting agencies, which would be the MGA par excellence. They exist in countries such as, for example, Italy –*the agenzia di sottoscrizione assicurativa*– and, of course, they exist in Spain, a forerunner in the insurance world with their appearance in the now repealed Law 26/2006, of 17 July, on private insurance and reinsurance mediation. It is surprising now, in the present context, how peacefully they entered our legal system, and the initial decision to include them in the regulation of insurance mediation, something that continues to weigh down underwriting agencies in, for example, the considerations made about them by the Directorate General for Taxation (cf. Consultations V2135-12 or V3188-14, among others), until their transfer to the regulation from 2011 onwards.

The truth is that, from a comparative law point of view, in many countries, MGAs are still simply insurance agents, for two reasons: firstly, because there is no other special category in which they fit better, as in the case of Italy or Spain, and secondly, the advantage offered by their inclusion in a much more common category – that of insurance agent – when it comes to guaranteeing them the freedom to provide services or to establish themselves within the European Union. A Spanish underwriting agency cannot establish branches or provide services without being established because it does not have equivalent recogni-

⁷ <https://www.dnb.nl/media/jbcarsgf/good-practice-outsourcing-to-authorized-agents-by-non-life-insurers.pdf>

⁷ <https://www.dnb.nl/media/jbcarsgf/good-practice-outsourcing-to-authorized-agents-by-non-life-insurers.pdf>

mientras que una agencia de seguros sí puede gozar de esa movilidad transfronteriza. De hecho, operan en nuestro país MGAs procedentes de otros Estados miembros, típicamente como sucursales, bajo apoderamientos conferidos en los Estados de origen, generándose paradojas como su relación con corredores de seguros, que casan mal con el planteamiento del vigente RDL 3/2020.

Esa convivencia en España de agencias de suscripción y agencias, o sucursales de agencias, especialmente apoderadas, tiene una lectura interesante. Ha de tenerse en cuenta que el artículo 60.1 de la LOSSEAR, al abordar las agencias de suscripción, tiene un nivel de detalle que no se escapa al observador avezado. “*Las entidades aseguradoras podrán suscribir contratos de apoderamiento con personas jurídicas españolas para la suscripción de riesgos en nombre y por cuenta de estas*”, señala. Es una afirmación que no obsta para que una aseguradora, española o no, apodere a un agente de seguros para la realización de ciertas tareas, siempre y cuando no se colisione con normas prohibitivas. El artículo 141.2 del RDL 3/2020 preceptúa así que “*El contenido del contrato será el que las partes acuerden libremente y se regirá supletoriamente por la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre contrato de agencia*”. Y bajo esa Ley de 1992, el agente puede “*promover actos y operaciones de comercio*”, o “*asumir también la función de concluir los promovidos por él*”, como recuerda su Exposición de Motivos, lo que ligado al concepto de distribución de seguros del artículo 129.1 del RDL 3/2020, que se refiere a la “*celebración*”, de contratos, deja lugar a mucho margen de interpretación.

Lo cierto es que la evolución del mercado apunta a un mayor y mayor protagonismo de los MGAs en la Unión Europea. Su capacidad de especialización, exploración de nichos de producto o de mercado, generación de ideas y soluciones específicas, canalización de la distribución a través de cadenas de venta idóneas, son sólo algunas de las características que hacen que su rol vaya a primar y completar otros canales de comunicación con los clientes finales. Sucede finalmente que los MGAs son una puerta de entrada idónea para el mundo del *private equity*, mucho menos receptivo a penetrar en las complejas e hiperreguladas estructuras de las aseguradoras y reaseguradoras tradicionales⁸, lo que contribuye a su pujanza y dinamismo.

¿Qué cabe esperar desde un punto de vista regulatorio? Sin duda, una gran vuelta de tuerca protagonizada por la propia EIOPA, que asuma, al menos de forma interina, el reforzar los mecanismos de control de la actividad de los MGAs. Las aseguradoras deben prepararse reforzando sus políticas de externalización en todo lo tocante a recurso a MGAs, y probablemente pasando a tener muy en cuenta (lo que hoy por hoy en contratación con cualquier tipo de MGA, rara vez se hace), el contenido mínimo de los contratos de externalización fijado por el artículo 274.4 del Reglamento Solvencia II. En el medio y largo plazo, no sería de extrañar que el propio concepto localista de “agencias de suscripción” haya de revisarse, y en este ejercicio España deberá defender no sólo los derechos adquiridos de estas -en algunos casos, decanas en su actividad-, sino facilitarles en todo caso la transición a cualquier modelo uniforme que se pueda establecer en el plano europeo.

tion in other Member States, whereas an insurance agency can enjoy this cross-border mobility. In fact, MGAs from other Member States operate in Spain, typically as branches, under powers of attorney conferred in the States of origin, creating paradoxes such as their relationship with insurance brokers, which do not fit in well with the approach of the current RDL 3/2020.

In Spain, this coexistence of underwriting agencies and agencies, or branches of agencies, especially proxy agencies, makes for interesting reading. It should be noted that Article 60(1) of the LOSSEAR, when dealing with underwriting agencies, has a level of detail that is not lost on the experienced observer. “*The insurance undertakings could subscribe binding authority agreements with Spanish legal persons for the underwriting of risks on behalf and on the account of those*” it states. This is a statement that does not prevent an insurance company, whether Spanish or not, from authorising an insurance agent to carry out certain tasks, as long as it does not contravene any prohibitions. Thus, Article 141(2) of RDL 3/2020 provides that “*The content of the contract shall be as freely agreed by the parties and shall be governed by Law 12/1992, of 27 May, on agency contracts*”. And under this 1992 Law, an agent may “*promote commercial acts and operations*”, or “*also assume the function of concluding those promoted by him*”, as its Explanatory Memorandum points out, which, linked to the concept of insurance distribution in Article 129(1) of RDL 3/2020, which refers to the “*conclusion*” of contracts, leaves a lot of room for interpretation.

What is certain is that the evolution of the market points to a greater and greater role for MGAs in the European Union. Their capacity for specialisation, exploration of product or market niches, generation of ideas and specific solutions, and the channelling of distribution through suitable sales chains are just some of the characteristics that mean that their role will take precedence over and complement other communications channels with end customers. Finally, MGAs are an ideal gateway for the world of private equity, which is much less receptive to penetrating the complex and hyper-regulated structures of traditional insurance and reinsurance companies⁸, thus contributing to their strength and dynamism.

What can be expected from a regulatory point of view? Undoubtedly, a major turnaround by EIOPA itself, which will take on, at least on an interim basis, the task of strengthening the control mechanisms for the activity of MGAs. Insurers should prepare themselves by reinforcing their outsourcing policies in all matters relating to the use of MGAs, and probably by taking into account the minimum content of outsourcing contracts set out in Article 274(4) of the Solvency II Regulation (which is rarely done at present in contracts with any type of MGA). In the medium and long term, it would not be surprising if the local concept of “underwriting agencies” itself were to be reviewed and in this exercise, Spain will have to defend not only the acquired rights of these - in some cases, deans in their activity - but also facilitate their transition to any uniform model that may be established at the European level.

⁸ Cfr., por ejemplo, [Insurance MGAs: Opportunities and considerations for investors](#) | McKinsey

⁸ Cfr., for example, [Insurance MGAs: Opportunities and considerations for investors](#) | McKinsey

En un mercado asegurador que reporta miles de reclamaciones anuales, la reciente resolución de la SCJN marca un cambio que podría ampliar la exposición de las aseguradoras a reclamos, demandas y juicios

Revolución en el Derecho de Seguros en México: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (“SCJN”) amplía la protección para los beneficiarios de seguros de vida, en asuntos de responsabilidad civil



Edgar A. Grajeda
Socio de Litigación, Arbitraje y Mediación



Eduardo Saucedo
Asociado senior de Litigación, Arbitraje y Mediación

1. Antecedentes

La SCJN ha emitido una histórica resolución en el Amparo Directo en Revisión 2128/2023, en el que amplió el plazo de prescripción para una reclamación relacionada con un fallecimiento de una persona que estaba amparada por un seguro de responsabilidad civil. Este fallo redefine la forma en que se aplican los derechos fundamentales en los contratos de seguros; estableciendo un precedente que definitivamente influirá en el sector asegurador y en la protección de los derechos humanos en México.

La reciente sentencia emitida por la SCJN, en el Amparo Directo en Revisión 2128/2023, puede marcar un precedente crucial en la interpretación de los plazos de prescripción para las reclamaciones relacionadas con los contratos de seguros en México.

El fallo responde, esencialmente, a la pregunta de si es constitucionalmente válido aplicar el plazo de dos años previsto en el artículo 81, fracción II, de la LCS de México, cuando la reclamación involucra la muerte de un tercero en un accidente cubierto por una póliza de seguro de responsabilidad civil, o en su lugar aplicar el plazo de cinco años de los seguros de vida.

La SCJN abordó este asunto desde una perspectiva constitucional y de derechos humanos, y se enfocó en garantizar y privilegiar el derecho humano de acceso a la justicia e interpretar la proporcionalidad para aplicarla a los plazos de prescripción.

2. Análisis de la Sentencia

» Norma cuestionada

El artículo 81 de la LCS de México establece que todas las acciones derivadas de un contrato de seguro prescribirán en dos años, salvo aquellas relacionadas con seguros de vida, para los cuales la prescripción es de cinco años.

En el caso en cuestión, la aseguradora argumentó que la muerte ocurrida al tratarse de un hecho ilícito amparado con una póliza de seguro de responsabilidad civil, el plazo de prescripción aplicable era el de dos años, mientras que los familiares de la persona fallecida sostuvieron que debía aplicarse un plazo mayor, es decir el de cinco (5) años, dado que la reclamación

In an insurance market that reports thousands of claims annually, the recent ruling of the SCJN marks a change that could expand the exposure of insurers to claims, lawsuits and litigation

A revolution in insurance law in Mexico: The Supreme Court of Justice of the Nation (“SCJN”) expands the protection for life insurance beneficiaries in civil liability matters



Edgar A. Grajeda
Litigation, Arbitration and Mediation Partner



Eduardo Saucedo
Litigation, Arbitration and Mediation Senior Associate

1. Background

The SCJN has issued a landmark ruling in a constitutional appeal (Amparo Directo en Revisión 2128/2023), in which it extended the limitation period for a claim related to the death of a person who was covered by a civil liability insurance policy. This ruling redefines the way in which fundamental rights are now applied in insurance contracts, establishing a precedent that will certainly influence the insurance sector and the protection of human rights in Mexico.

The recent ruling issued by the SCJN, in Amparo Directo en Revisión 2128/2023, may set a crucial precedent in the interpretation of the limitation periods for claims related to insurance contracts in Mexico.

The ruling essentially answers the question of whether it is constitutionally permissible to apply the two (2) year limitation period provided for in Article 81, Section II of LCS of Mexico, when the claim involves the death of a third party in an accident covered by a civil liability insurance policy, or instead apply the five (5) year limitation period for life insurance.

The SCJN approached this issue from a constitutional and human rights perspective and focused on guaranteeing and prioritising the human right of access to justice and interpreting proportionality to apply it to the limitation periods.

2. Analysis of the Judgment

» The law in question

Article 81 of the LCS of Mexico establishes that all actions arising from an insurance contract shall be subject to a two (2) year limitation period, except those related to life insurance, for which the limitation period is five (5) years.

In the case in question, the insurer argued that the death occurred as a result of a wrongful act covered by a civil liability insurance contract and that the applicable limitation period was two (2) years. The relatives of the deceased argued that a longer period i.e., five (5) years, should apply, given that the claim was directly

se relacionaba directamente con la pérdida de una vida y ello involucraba derechos fundamentales.

» **El Derecho de Acceso a la Justicia y su impacto en la prescripción**

La SCJN estableció que, conforme al artículo 17 de la Constitución, el derecho de acceso a la justicia debe garantizarse de manera expedita y efectiva. Sin embargo, este principio no puede ser implementado sin considerar el contexto específico de cada caso, particularmente cuando la reclamación involucra derechos fundamentales como la vida, frente a intereses estrictamente patrimoniales.

El núcleo de la argumentación de la SCJN estriba en que los plazos de prescripción, aunque necesarios para otorgar seguridad jurídica, deben ser razonables y proporcionales según la naturaleza de los derechos en juego. En este caso, la muerte de una persona no puede ser tratada con la misma rigidez que una reclamación por daños patrimoniales. En este sentido, la sentencia de la SCJN refleja una “interpretación conforme” a la Constitución, adoptando el criterio de que el plazo aplicable debe ser el más amplio posible, ya que se está protegiendo un derecho humano fundamental relacionado con la vida.

3. Análisis del principio de proporcionalidad aplicado por la SCJN

Para sostener su argumentación, la SCJN utilizó el *test* de proporcionalidad en sentido estricto, para determinar si la restricción al derecho de acceso a la justicia —en la forma de un plazo de prescripción de dos años— cumplía con los requisitos constitucionales. Este análisis se enfocó en evaluar si dicha restricción perseguía un fin legítimo (seguridad jurídica), si era necesaria y si resultaba proporcional en un sentido estricto.

Concluyó que, aunque la prescripción es necesaria para la estabilidad de las relaciones jurídicas, el plazo de dos años en casos de fallecimientos amparados con pólizas de responsabilidad civil es desproporcionado, ya que no considera el tiempo necesario para que los familiares procesen la pérdida, investiguen los hechos y preparen adecuadamente una reclamación. Por ello, determinó que el plazo de cinco años generalmente reservado exclusivamente para seguros de vida debe aplicarse también en ese caso, a seguros de responsabilidad civil, cuando está en juego la vida de una persona.

4. Precedente innovador en México

La decisión de la SCJN abre un nuevo campo de interpretación que tiene el potencial de alterar significativamente la práctica de las reclamaciones y los litigios de seguros en México. En consecuencia de este fallo, la SCJN determinó que las reclamaciones por fallecimiento, incluso en contratos de responsabilidad civil deben beneficiarse del plazo de prescripción de cinco años, subrayando que lo importante es la gravedad de la afectación a derechos fundamentales como la vida, no a la naturaleza del contrato.

Asimismo, la SCJN considera que este fallo no solo fortalece el derecho de acceso a la justicia, sino que también refuerza la protección de los derechos humanos en la interpretación de las normas de

related to the loss of a life and involved fundamental rights.

» **The right of access to justice and its impact on the limitation period**

The SCJN held that, under Article 17 of the Constitution, the right of access to justice must be guaranteed in an expeditious and effective manner. However, this principle cannot be implemented without considering the specific context of each case, particularly when the claim involves fundamental rights such as life, as opposed to strictly economic interests.

The core of the SCJN’s argument is that limitation periods, although necessary to provide legal certainty, must be reasonable and proportionate to the nature of the rights at stake. In this case, the death of a person cannot be treated with the same rigidity as a claim for pecuniary damages. Accordingly, the SCJN’s ruling reflects an “interpretation in conformity” with the Constitution, adopting the criterion that the applicable limitation period should be as long as possible since a fundamental human right related to life is being protected.

3. Analysis of the Principle of Proportionality applied by the SCJN

To support its argument, the SCJN used the test of proportionality in the strict sense, to determine whether the restriction of the right of access to justice - in the form of a two (2) years limitation period - complied with requirements under the Constitution. This analysis focused on assessing whether such a restriction pursued a legitimate aim (legal certainty), whether it was necessary and whether it was strictly proportionate.

The SCJN concluded that, although the prescription of claims is necessary for the stability of legal relationships, the two (2) years limitation period in cases of death covered by civil liability insurance contracts is disproportionate, as it does not take into account the time necessary for relatives to process the loss, investigate the facts and adequately prepare a claim. Therefore, it ruled that the five (5) year limitation period generally reserved exclusively for life insurance should also apply to civil liability insurance when a person’s life is at stake.

4. Groundbreaking Precedent in Mexico

The SCJN’s decision creates a new interpretation that has the potential to significantly alter the practice of insurance claims and litigation in Mexico. Accordingly, the SCJN determined that claims arising from death, even in civil liability contracts, must benefit from the five (5) year limitation period, underlining that what matters is the seriousness of the infringement of fundamental rights such as life, not the nature of the contract.

Furthermore, the SCJN considers that this ruling not only strengthens the right of access to justice but also reinforces the protection of human rights in the interpretation of private

derecho privado, lo que tiene implicaciones prácticas significativas para aseguradoras y asegurados.

5. Conclusión

No obstante, este cambio puede mejorar la percepción pública de la industria aseguradora, que ahora enfrentará la obligación de responder con mayor sensibilidad ante situaciones que involucren la vida humana; consideramos que este precedente fortalecerá futuras reclamaciones y litigios en materias similares y servirá como una guía rectora para quienes participan en reclamaciones de seguros. Las aseguradoras se encontrarán ahora obligadas a adoptar un enfoque más cuidadoso y equitativo en los asuntos que involucren vidas de terceros.

Desde una perspectiva comercial, este criterio obligará a las aseguradoras a replantear sus estrategias de riesgo y ajustar sus coberturas en las pólizas de responsabilidad civil, ya que estarán sujetas a posibles reclamaciones por un periodo más largo en casos de muerte. Este fallo no solo extiende el plazo de prescripción, sino que también representa un aumento en la exposición financiera de las aseguradoras, alargando el período durante el cual podrían recibir reclamaciones por muerte bajo una póliza de responsabilidad civil.

Ante este nuevo escenario legal, las aseguradoras deben revisar sus coberturas y estrategias de gestión de riesgos para mitigar el impacto de reclamaciones extendidas. Recomendamos realizar auditorías internas y revisar los términos de las pólizas para estar alineados con esta nueva jurisprudencia, evitando así riesgos imprevistos que puedan comprometer su estabilidad financiera.

Este fallo es solo el comienzo de lo que podría ser una tendencia más amplia hacia una mayor protección de los derechos fundamentales en los seguros. Las empresas del sector deben estar preparadas para responder de manera más flexible y adaptativa a los cambios en el entorno regulatorio, lo que les permitirá mantenerse competitivas en un mercado en constante evolución.

Cuando no es una cosa es otra: la preexistencia en los seguros de personas



Irene Moreno
Asociada de Seguros y Reaseguros de Pérez-Llorca

Del artículo 10.1 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro (“LCS”) se deriva que las aseguradoras tienen el deber de plantear un cuestionario adecuado. Y ello porque el deber de declaración se entiende como una obligación precontractual del tomador de contestar o dar respuesta, ni más ni menos, a lo que pregunte la aseguradora. El cuestionario puede ser un conjunto de cuestiones en un documento, o un conjunto de preguntas, respuestas, solicitudes de aclaraciones, cruce de documentación, etc., en el contexto de un proceso de suscripción. Lo cierto es que en los seguros de salud o de vida/incapacidad el cuestionario cobra singular importancia, debido a que, si el cuestionario es demasiado ambiguo, genérico o incompleto, recaen sobre las aseguradoras las consecuencias de no haber realizado las preguntas que hubieran permitido al tomador vincular unos antecedentes determinados con la causa de

law, which has significant practical implications for insurers and policyholders.

5. Conclusion

This change may improve the public perception of the insurance industry, which will now face an obligation to respond with greater sensitivity to situations involving human life; we believe that this precedent will strengthen future claims and litigation in similar matters and serve as a guiding principle for those involved in insurance claims. Insurers will now be obliged to adopt a more careful and equitable approach to matters involving the lives of others.

From a commercial perspective, this standard will force insurers to rethink their risk strategies and adjust their coverage in civil liability policies, as they will be subject to potential claims for a longer period of time in cases involving the death of an individual. This ruling not only extends the limitation period but also increases the financial exposure of insurers, lengthening the period during which they could receive claims involving the death of an individual under a civil liability policy.

In light of this new legal scenario, insurers should review their coverage and risk management strategies to mitigate the impact of claims with longer limitation periods. We recommend conducting internal audits and reviewing the terms of policies to ensure their compliance with this new jurisprudence, thus avoiding unforeseen risks that could compromise their financial stability.

The ruling is just the beginning of what could be a broader trend towards the greater protection of fundamental rights in the insurance sector. Companies in the sector must be prepared to be more flexible and adaptive in responding to changes in the regulatory environment, which will allow them to remain competitive in a constantly evolving market.

When it's not one thing, it's another: pre-existing conditions in personal insurance policies



Irene Moreno
Insurance and Reinsurance Lawyer at Pérez-Llorca

Article 10(1) of Law 50/1980, of 8 October 1980, on Insurance Contracts (the “LCS”), provides that insurers have the duty to provide an appropriate questionnaire. This is because the duty to declare is considered a pre-contractual obligation of the policyholder to answer or provide a response to the insurer's questions. The questionnaire can be a set of questions in a document, or a set of questions, answers, requests for clarification, or cross-checking of documentation, inter alia, in the context of entering an insurance contract. What is certain is that in health or life/disability insurance, the questionnaire is particularly important, because if a questionnaire is too ambiguous, generic or incomplete, insurers are liable for the consequences of not having asked the questions that would have allowed a policyholder to link a certain medical history to the cause of

un siniestro⁹. Esto en ocasiones genera una problemática de “*teléfono escacharrado*” donde la aseguradora considera que la respuesta -o a *sensu contrario*, la no respuesta- dada por el tomador en el cuestionario permite eximir a la aseguradora del pago (*cf.* artículo 4 de la LCS); mientras que el tomador y/o asegurado considera que la pregunta era equívoca.

La realidad estriba en que la única eximente que permite liberar a las aseguradoras de hacer frente al pago en tales casos es demostrando que a la hora de la declaración del riesgo existió dolo o culpa grave por parte del tomador (*cf.* artículo 10.3 de la LCS). La práctica corrobora que acreditar esto no es una tarea fácil para las aseguradoras, dado que para aplicar dicha exoneración, no valdría una simple inexactitud en las respuestas, sino que esa inexactitud debe ser “*intencionada o debida a una culpa o negligencia de especial intensidad*” (SSTS (Sala de lo Civil, Sección 1^a) núm. 1573/2023, de 14 de noviembre; núm. 912/2023, de 8 de junio; núm. 333/2020, de 22 de junio; núm. 611/2020, de 16 de noviembre, entre otras).

Concretamente, la STS 345/2020, de 23 de julio -entre otras- señala que el deber de declaración se considera infringido cuando concurren los siguientes requisitos:

- » que se haya omitido o comunicado incorrectamente un dato relevante;
- » que dicho dato hubiera sido requerido por la aseguradora mediante el correspondiente cuestionario y de manera clara y expresa;
- » que el riesgo declarado sea distinto del real;
- » que el dato omitido o comunicado con inexactitud fuera conocido o debiera haber sido conocido con un mínimo de diligencia por el solicitante en el momento de realizar la reclamación;
- » que el dato sea desconocido para la aseguradora en ese mismo momento; y
- » que exista una relación causal entre la circunstancia omitida y el riesgo cubierto.

Debido a lo anterior, las aseguradoras se vuelven víctimas de su propio cuestionario teniendo que demostrar que las preguntas formuladas eran conducentes a que, en sus circunstancias, el tomador pudiera razonablemente advertir o ser consciente de la existencia de antecedentes médico-sanitarios relacionados con su estado de salud, que la aseguradora debiera conocer para poder identificar y valorar correctamente el riesgo asegurado con las coberturas -de salud, vida, invalidez, etc.- contratadas.

Por lo tanto, se podría dar el caso de que, incluso cuando exista una enfermedad previa diagnosticada, si el cuestionario no estaba correctamente formulado o las preguntas no hacían intuir al tomador que debía responder manifestando tales circunstancias, no se podría presumir dolo o negligencia grave y consecuentemente, tampoco se podría liberar a la aseguradora del pago. Para evitar estas posibles situaciones, algunas aseguradoras optan por incorporar

a claim.⁹ This sometimes leads to a “*broken telephone*” problem where an insurer may consider that the answer - or rather, the non-answer - given by a policyholder in a questionnaire exempts the insurer from payment (*cf.* Article 4 of the LCS); while the policyholder and/or insured considers that the question was misleading.

The reality is that the only circumstance that allows insurers to be exempted from payment in such cases is by demonstrating that at the time of declaring the risk there was fraud or gross negligence on the part of the policyholder (*cf.* Article 10(3) of the LCS). In practice, proving this is not easy for insurers, given that to avail of this exemption, a mere inaccuracy in the answers would not be enough. Rather, this inaccuracy must be “*intentional or due to a fault or negligence of special intensity*” (Supreme Court Judgments (Civil Chamber, First Section) No. 1573/2023 of 14 November; No. 912/2023 of 8 June; No. 333/2020 of 22 June, and No. 611/2020 of 16 November, among others).

Specifically, Supreme Court Judgment No. 345/2020 of 23 July, among others, states that the duty to declare is considered to have been infringed in the following circumstances:

- » where a relevant piece of information has been omitted or incorrectly communicated;
- » where this information was clearly and expressly requested by the insurer through the corresponding questionnaire;
- » where the declared risk is different from the real one;
- » where the omitted or incorrectly communicated information was known or should have been known with a minimum of diligence by the claimant at the moment of making the claim;
- » where the information was unknown to the insurer at that time; and
- » where there is a causal relationship between the information that was omitted and the risk covered.

Due to the above, insurers become victims of their own questionnaires by having to demonstrate that the questions asked were such that, in the circumstances, the policyholder could reasonably notice or be aware of the existence of a medical history related to the state of their health, which the insurer must know in order to correctly identify and evaluate the insured risk with the coverage - health, life, disability, etc. - that has been contracted.

Therefore, it may be the case that, even when there is a previously diagnosed illness, if the questionnaire was not correctly formulated or the questions did not make the policyholder suspect that he/she should answer by stating such facts, it would not be possible to presume fraud or gross negligence and consequently, the insurer could not be released from the payment. To avoid these situations, some insurers

⁹ *Cf.* SSTS (Sala de lo Civil, Sección 1^a) núm. 611/2020, de 16 de noviembre, que cita la núm. 378/2020, de 30 de junio; núm. 345/2020, de 23 de junio; núm. 7/2020, de 8 de enero; núm. 53/2019, de 24 de enero; 323/2018, de 30 de mayo; 273/2018, de 10 de mayo, entre otras.

⁹ *Cf.* Supreme Court Judgments (Civil Chamber, Section 1) No. 611/2020 of 16 November, citing No. 378/2020 of 30 June; No. 345/2020 of 23 June; No. 7/2020 of 8 January; No. 53/2019 of 24 January; No. 323/2018 of 30 May, and No. 273/2018 of 10 May, among others.

como cláusula de exclusión la cobertura de cualesquiera enfermedades preexistentes -sin especificar cuáles- a la fecha de contratación de la póliza.

Este tipo de cláusulas de exclusión tan generales suponen una clara limitación de los derechos del asegurado y además, tal y como señala la STS -Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3ª-, núm. 1691/2020, de 9 de diciembre, dicha exclusión es contraria a lo dispuesto en el artículo 10.1 de la LCS, ya que se traslada al tomador las consecuencias de no declarar cualquier tipo de lesión o enfermedad, cuando es el propio artículo 10 de la LCS el que exige al tomador del deber de declaración cuando no se le someta a cuestionario o cuando no se le pregunta sobre unas circunstancias en concreto.

Otra vía que han explorado las aseguradoras de para tratar de liberarse del pago de una prestación, siempre moviéndonos en seguros de personas, es alegar la ocurrencia de la enfermedad con anterioridad a la fecha de suscripción de la póliza de seguro (*cf.* artículo 4 de la LCS). En estos casos, la jurisprudencia considera que hay que diferenciar entre el evento futuro e incierto que constituye el riesgo sobre el que gira el contrato de seguro, y la existencia de una enfermedad que puede o no conducir al evento previsto. Por tanto, no parece que la enfermedad por sí sola sea el riesgo que asume la aseguradora, sino la posibilidad de que tal enfermedad pueda producir determinados efectos dañinos (STS -Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3ª-, núm. 1691/2020, de 9 de diciembre, o SAP de las Palmas núm. 183/2010, de 8 de abril). De esta forma, el siniestro o evento dañino se concreta en el momento de estabilización de las secuelas y/o en la declaración formal de incapacidad -ya sea mediante resolución administrativa o judicial- sin que ello arrebatase el carácter aleatorio al contrato, dado que no se sabía si el riesgo se iba o no a materializar (SAP de Madrid núm. 436/2022 de 16 de noviembre, SAP de Barcelona (Sección 17ª) núm. 426/2015, de 4 de noviembre).

En conclusión, “*cuando no es una cosa es otra*”. Por ello, la solución más viable para evitar futuras controversias es plantear un cuestionario claro y preciso que defina correctamente los riesgos que deben valorar las aseguradoras a la hora de otorgar cobertura, puesto que cualquier imprecisión podrá conllevar que la aseguradora deba asumir las consecuencias derivadas de dicha imprecisión, salvo que pueda demostrar el dolo y/o culpa grave del tomador y/o que el siniestro hubiera ocurrido con anterioridad a la fecha de suscripción del seguro.

5.3 Notas Jurídicas

Seguros y Reaseguros

14/03/2024

La Directiva sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos

Joaquín Ruiz Echaury, Sonsoles Centeno, Natalia Olmos, Ignacio Santabaya, Raúl Rubio, Andy Ramos Gil

opt to incorporate, as an exclusion clause, the coverage of any pre-existing illnesses - without specifying which ones - on the date of contracting the policy.

This type of very general exclusion clause represents a clear limitation of the rights of an insured person and, furthermore, as the Supreme Court Judgment - Contentious Administrative Chamber, Third Section, No. 1691/2020 of 9 December notes, this exclusion is contrary to the provisions of Article 10(1) of the LCS, since it transfers the consequences of the failure to declare any type of injury or illness to policyholders when Article 10 of the LCS exempts policyholders from the duty to declare when they are not subject to a questionnaire or when they have not been asked about specific circumstances.

Another approach that insurers have explored to try to free themselves from the payment of a benefit, always in the case of personal insurance, is to claim that the illness occurred before the signing date of the insurance policy (*cf.* Article 4 of the LCS). In these cases, the relevant case law provides that it is necessary to differentiate between the future and uncertain event that constitutes the risk on which the insurance contract is based, and the existence of an illness that may or may not lead to the foreseen event. Therefore, it does not seem that the illness in itself is the risk assumed by the insurer, but rather the possibility that such an illness may cause certain harmful effects (Supreme Court Judgment - Contentious Administrative Chamber, 3rd Section, No. 1691/2020 of 9 December, or the Judgment of the Las Palmas Court of Appeal No. 183/2010 of 8 April). Accordingly, the loss or harmful event is specified at the moment of the stabilisation of the sequelae and/or the formal declaration of disability - whether by administrative or judicial decision - without this removing the random nature of the contract, given that it was not known whether or not the risk would materialise (the Judgment of the Madrid Court of Appeal No. 436/2022 of 16 November and the Judgment of the Barcelona Court of Appeal (17th Section) No. 426/2015 of 4 November).

In conclusion, “*when it’s not one thing, it’s another*”. Therefore, the most viable solution to avoid future disputes is to draft a clear and precise questionnaire that correctly defines the risks that insurers must assess when granting cover, given that any imprecision may mean that the insurer must assume the consequences arising from said imprecision unless it can prove the fraud and/or gross negligence of the policyholder and/or that the claim had occurred before the date of signing the insurance policy.

5.3 Legal Briefings

Insurance and Reinsurance

14/03/2024

The Directive on liability for defective products

Joaquín Ruiz Echaury, Sonsoles Centeno, Natalia Olmos, Ignacio Santabaya, Raúl Rubio, Andy Ramos Gil

04/07/2024

Nueva Guía Técnica de la CNMV sobre Comisiones de Auditoría de Entidades de Interés Público*José María de Paz, Josefina García Pedroviejo, Yolanda Azanza, Joaquín Ruiz Echaurre***Fiscal**

01/02/2024

El Tribunal Constitucional declara inconstitucionales determinadas modificaciones en el Impuesto sobre Sociedades introducidas por el Real Decreto-ley 3/2016*Clara Jiménez, Daniel Olabarri*

09/04/2024

Las retribuciones percibidas por los administradores que estén contabilizadas y cuya onerosidad esté debidamente acreditada, son gasto deducible, aun cuando los estatutos sociales no prevean el cargo como retribuido*José Suárez, Alejandra Flores*

07/11/2024

La Comisión Europea alcanza un acuerdo en relación con el Paquete ViDA*Clara Jiménez, Marta Nuñez, Jaime Castaño Hernández*

22/11/2024

Reformas fiscales finalmente incluidas en el Proyecto de Ley de Imposición Mínima*José Suárez, Clara Jiménez, Marta Nuñez***Propiedad Intelectual, industrial y Tecnología**

26/01/2024

La CNMC y el Desafío del DSA: Asumiendo el mando en la Supervisión Digital en España*Jorge Masía, Juan Jiménez-Laiglesia, Beatriz García, Raúl Rubio, Andy Ramos***ESG**

21/11/2024

Proyecto de ley de información empresarial sobre sostenibilidad*José María de Paz, Eduardo Arbizu***Mercado de valores**

26/04/2024

Aprobación de la Listing Act – Novedades relevantes para las operaciones de Mercado de Capitales*Teresa Méndez, Yolanda Azanza, Josefina García Pedroviejo*

04/07/2024

The CNMV's new Technical Guide on Audit Committees at Public-Interest Entities*José María de Paz, Josefina García Pedroviejo, Yolanda Azanza, Joaquín Ruiz Echaurre***Tax**01/02/2024 SP**The Constitutional Court declares unconstitutional certain amendments to corporate income tax introduced by Royal Decree-law 3/2016***Clara Jiménez, Daniel Olabarri*09/04/2024 SP**Remuneration received by directors that is recorded in the accounts and duly substantiated as being onerous is a deductible expense, even if the company's articles of association do not provide for the position to be remunerated***José Suárez, Alejandra Flores*07/11/2024 SP**European Commission reaches agreement on the ViDA Package***Clara Jiménez, Marta Nuñez, Jaime Castaño Hernández*22/11/2024 SP**Tax reforms finally included in the Draft Law on Minimum Taxation***José Suárez, Clara Jiménez, Marta Nuñez***Intellectual Property and Technology**26/01/2024 SP**The CNMC and the DSA challenge: Taking charge of digital supervision in Spain***Jorge Masía, Juan Jiménez-Laiglesia, Beatriz García, Raúl Rubio, Andy Ramos***ESG**

21/11/2024

Draft law on corporate sustainability reporting*José María de Paz, Eduardo Arbizu***Capital Markets**

26/04/2024

Approval of the Listing Act – Developments relevant to capital market transactions*Teresa Méndez, Yolanda Azanza, Josefina García Pedroviejo*

15/11/2024

Actualización sobre las Novedades relevantes para las operaciones de Mercado de Capitales – Listing Act*Teresa Méndez, Yolanda Azanza, Josefina García Pedroviejo***Arbitraje**

04/04/2024

Las obligaciones para las empresas en términos de notificaciones electrónicas y primeros emplazamientos judiciales*Jordi Gras, Mariona Bernaus*

05/04/2024

Novedades en el ámbito de las acciones colectivas del Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia del servicio público de la justicia y acciones para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios*Ignacio Santabaya, Sonsoles Centeno, Beatriz García, Natalia Olmos*

12/04/2024

Eficiencia procesal, métodos alternativos de resolución de conflictos y costas en materia civil y mercantil*Ignacio Santabaya, Sonsoles Centeno, Beatriz García, Natalia Olmos***Laboral, compensación y beneficios**

03/12/2024

Real Decreto Ley 8/2024, de 28 de noviembre: Medidas urgentes complementarias ante los daños causados por la DANA*Yolanda Valdeolivas***Penal Económico e Investigaciones**

31/10/2024

Aprobación del Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.*Juan Palomino, Adriana de Buerba, Jorge Walser Boserman***Público**

11/09/2024

Modificaciones relevantes en la cuestión prejudicial, el recurso de casación y otras cuestiones procedimentales ante el Tribunal de Justicia y ante el Tribunal General de la Unión Europea*Sonsoles Centeno, Ana María Rodríguez, Rita Leandro Vasconcelos*

15/11/2024

Update on the approval of the Listing Act – developments relevant to capital market transactions*Teresa Méndez, Yolanda Azanza, Josefina García Pedroviejo***Arbitration**04/04/2024 SP**Obligations for companies in terms of electronic notifications and first court summonses***Jordi Gras, Mariona Bernaus*

05/04/2024

New developments regarding collective actions contained in the Draft Organic Law on the efficiency of the public service of justice and actions for the protection and defence of the rights and interests of consumers and users*Ignacio Santabaya, Sonsoles Centeno, Beatriz García, Natalia Olmos*

12/04/2024

Procedural efficiency, alternative dispute resolution measures and costs in civil and commercial matters*Ignacio Santabaya, Sonsoles Centeno, Beatriz García, Natalia Olmos***Employment, Compensation and Benefits**

03/12/2024

Royal Decree-law 8/2024 of 28 November: Urgent complementary measures in response to the damage caused by the DANA*Yolanda Valdeolivas***White Collar Crime and Investigations**

31/10/2024

Approval of the Statute of the Independent Authority for Whistleblower Protection*Juan Palomino, Adriana de Buerba, Jorge Walser Boserman***Public**

11/09/2024

Relevant amendments regarding references for a preliminary ruling, appeal proceedings and other procedural matters before the Court of Justice and before the General Court of the European Union*Sonsoles Centeno, Ana María Rodríguez, Rita Leandro Vasconcelos*

04/11/2024

El TJUE interpreta que los operadores de terceros Estados no pueden reclamar igualdad de trato en la contratación pública de la UE, si no hay un acuerdo internacional entre la UE y ese tercer Estado que garantice la reciprocidad

Sonsoles Centeno, Beatriz García, Elena Veleiro

5.4 Menciones en prensa

23/01/2024 Actualidad aseguradora

El equipo de Seguros y Reaseguros de Pérez-Llorca analiza los posibles cambios normativos en 2024

Rafael Fernández

30/01/2024 Inese

Pérez-Llorca nombra a Rafael Fernández como socio del Área de Seguros y Reaseguros

Rafael Fernández

25/01/2024 SeguroNews, Grupo Aseguranza

El área de Seguros de Pérez-Llorca publica su Anuario de Seguros

Joaquín Ruiz Echauri, Rafael Fernández

16/02/2024 Iberian Lawyer

El equipo de Seguros y Reaseguros de Pérez-Llorca ha participado en el asesoramiento a Liberty Seguros en su venta a Generali, considerada la operación del mes de enero 2024 por TTR

Joaquín Ruiz Echauri, Fátima Eizaguirre, Jesús Almarcha, Luis María González, Sofía Trigo

11/03/2024 Advocatus

El equipo de Seguros y Reaseguros de Pérez-Llorca ha participado en el asesoramiento a Miura Partners en el capital de Sabseg Seguros

Rodrigo Nogueira

01/04/2024 Cinco Días

Legal 500 reconoce a Joaquín Ruiz Echauri en la categoría de Hall of fame en España Joaquín Ruiz Echauri

Joaquín Ruiz Echauri

17/04/2024 Aseguranza

El área de Seguros de Pérez-Llorca publica las principales novedades normativas y jurisprudenciales del sector asegurador

Joaquín Ruiz Echauri, Rafael Fernández

04/11/2024

The CJEU finds that operators from third States are not entitled to equal treatment in EU public procurement procedures in the absence of an international agreement guaranteeing reciprocity between the EU and that third State

Sonsoles Centeno, Beatriz García, Elena Veleiro

5.4 In the press

23/01/2024 Actualidad aseguradora SP

Pérez-Llorca's Insurance and Reinsurance team analyses possible regulatory changes in 2024

Rafael Fernández

30/01/2024 Inese

Pérez-Llorca appoints Rafael Fernández as partner of the Insurance and Reinsurance Area

Rafael Fernández

25/01/2024 SeguroNews, Grupo Aseguranza SP

Pérez-Llorca's Insurance practice publishes its Insurance Year in Review

Joaquín Ruiz Echauri, Rafael Fernández

16/02/2024 Iberian Lawyer

Pérez-Llorca's Insurance and Reinsurance team advised Liberty Seguros on its sale to Generali, considered the deal of the month in January 2024 by TTR

Joaquín Ruiz Echauri, Fátima Eizaguirre, Jesús Almarcha, Luis María González, Sofía Trigo

11/03/2024 Advocatus PT

Pérez-Llorca's Insurance and Reinsurance team advised Miura Partners on its acquisition of a majority stake in Sabseg Seguros

Rodrigo Nogueira

01/04/2024 Cinco Días

Legal 500 recognises Joaquín Ruiz Echauri in the Hall of Fame category for Spain

Joaquín Ruiz Echauri

17/04/2024 Aseguranza SP

Pérez-Llorca's Insurance practice publishes the main regulatory and case law developments in the insurance sector

Joaquín Ruiz Echauri, Rafael Fernández

20/05/2024 ECO

El equipo de Seguros y Reaseguros de Pérez-Llorca ha participado en el asesoramiento a Grupo DIA*Rodrigo Nogueira*

28/05/2024 Cinco Días

Pérez-Llorca incorpora a Felipe Vázquez Acedo como socio de Seguros*Felipe Vázquez Acedo, Joaquín Ruiz Echaury, Rafael Fernández, Inês Palma Ramalho*

31/05/2024 Economist & Jurist

Entrevista a Joaquín Ruiz Echaury: “Nuestra apuesta como despacho es convertirnos en el asesor estratégico de las aseguradoras”*Joaquín Ruiz Echaury, Rafael Fernández, Felipe Vázquez Acedo, Fátima Eizaguirre, Juan Pablo Nieto, Irene Moreno Garrido*

26/09/2024 INESE

Irene Moreno participa en el festival de la inclusión y la diversidad Dive In festival*Irene Moreno*

31/10/2024 SeguroNews

Jesús Almarcha participa en la Cátedra Fundación Inade-UDC enfocada en los riesgos causados por la IA*Jesús Almarcha*

07/11/2024 El Economista

Joaquín Ruiz Echaury participa en el XXX Congreso Nacional de Derecho Sanitario*Joaquín Ruiz Echaury*

08/11/2024 SegurosNews

El equipo de Seguros y Reaseguros de Pérez-Llorca colabora con los afectados por la DANA*Rafael Fernández*

09/12/2024 The Latin American Lawyer

El equipo de Seguros y Reaseguros de Pérez-Llorca ha participado en el asesoramiento a Crédito Maestro*Jacinto Ávalos Capin*

12/12/2024 INESE

El equipo de Seguros y Reaseguros de analiza el impacto de la Inteligencia Artificial en el sector asegurador en la Cátedra Pérez-Llorca/IE*Joaquín Ruiz Echaury, Rafael Fernández, Felipe Vázquez Acedo*

20/05/2024 ECO PT

Pérez-Llorca's Insurance and Reinsurance team advised DIA Group (in Portuguese)*Rodrigo Nogueira*

28/05/2024 Cinco Días SP

Felipe Vázquez Acedo joins Pérez-Llorca as Insurance partner*Felipe Vázquez Acedo, Joaquín Ruiz Echaury, Rafael Fernández, Inês Palma Ramalho*

31/05/2024 Economist & Jurist SP

Interview with Joaquín Ruiz Echaury: “Our commitment as a law firm is to become the strategic adviser to insurers”*Joaquín Ruiz Echaury, Rafael Fernández, Felipe Vázquez Acedo, Fátima Eizaguirre, Juan Pablo Nieto, Irene Moreno Garrido*

26/09/2024 INESE SP

Irene Moreno participates in the inclusion and diversity festival Dive In*Irene Moreno*

31/10/2024 SeguroNews SP

Jesús Almarcha participates in the Inade-UDC Foundation Chair focused on risks caused by AI*Jesús Almarcha*

07/11/2024 El Economista SP

Joaquín Ruiz Echaury participates in the XXX National Congress on Health Law*Joaquín Ruiz Echaury*

08/11/2024 SegurosNews SP

Pérez-Llorca's Insurance and Reinsurance team collaborates with those affected by Storm DANA*Rafael Fernández*

09/12/2024 The Latin American Lawyer

Pérez-Llorca's Insurance and Reinsurance team advised Crédito Maestro*Jacinto Ávalos Capin*

12/12/2024 INESE SP

The Insurance and Reinsurance team analyses the impact of artificial intelligence on the insurance sector at the Pérez-Llorca/IE Chair*Joaquín Ruiz Echaury, Rafael Fernández, Felipe Vázquez Acedo*

5.5 Artículos Doctrinales

30/01/2024 Expansión

Joaquín Ruiz Echaury participa en un reportaje sobre perspectivas del sector bancaseguros

Joaquín Ruiz Echaury

06/02/2024 Aseguradores

Vida, ventas, corredores. Problemas y soluciones

Joaquín Ruiz Echaury

12/03/2024 INESE

Remotamente cyber

Joaquín Ruiz Echaury

11/06/2024 INESE

Crítico e importante

Felipe Vázquez

08/08/2024 Practical Law

Directors' and Officers' Liability Insurance (Spain)

Rafael Fernández, Juan Pablo Nieto

24/09/2024 INESE

Deme su póliza

Joaquín Ruiz Echaury

03/10/2024 ECO

Incêndios, seguros e humanidade

Inês Palma Ramalho

09/10/2024 Iberian Lawyer

Premios Forty under 40 2024

Inês Palma Ramalho

5.6 Actividad Docente

IE University

Rafael Fernández ha colaborado con el IE durante el año académico 2023/2024 impartiendo los siguientes cursos:

- » Seguro de Manifestaciones y Garantías en operaciones de M&A (Máster de Acceso a la Abogacía)
- » Commercial Law I and Corporations (Grado)
- » Principios Generales de Derecho- IE Legal Clinic (Grado)

5.5 Academic articles

30/01/2024 Expansión SP

Joaquín Ruiz Echaury participates in a report on the outlook for the bancassurance sector

Joaquín Ruiz Echaury

06/02/2024 Aseguradores

Life, sales, brokers Problems and solutions

Joaquín Ruiz Echaury

12/03/2024 INESE

Remotely cyber

Joaquín Ruiz Echaury

11/06/2024 INESE

Critical or important

Felipe Vázquez

08/08/2024 Practical Law

Directors' and Officers' Liability Insurance (Spain)

Rafael Fernández, Juan Pablo Nieto

24/09/2024 INESE

Give me your policy

Joaquín Ruiz Echaury

03/10/2024 ECO

Fire, insurance and humanity

Inês Palma Ramalho

09/10/2024 Iberian Lawyer

Forty under 40 Awards 2024

Inês Palma Ramalho

5.6 Teaching

IE University

Rafael Fernández has collaborated with IE during the 2023/2024 academic year by teaching the following subjects:

- » Representations and Warranties Insurance in M&A transactions (Master's Degree for Access to the Legal Profession)
- » Commercial Law I and Corporations (Undergraduate)
- » General Principles of Law- IE Legal Clinic (Undergraduate)

5.7 Eventos

25/01/2024

El año de DORA: Retos de DORA para el Sector Financiero y Asegurador

En este evento organizado por Pérez Llorca se analizó el alcance del Reglamento unifica normas estrictas y uniformes de ciberseguridad y resiliencia operativa digital, lo que incluye la supervisión de los proveedores de servicios de TIC y la exigencia a las instituciones de implementar estrategias de gestión de riesgos y planes de recuperación. En el evento participaron varios socios de Pérez Llorca: Joaquín Ruiz Echaury, Raúl Rubio y Josefina García Pedroviejo.



5.7 Events

25/01/2024

The year of DORA: DORA's Challenges for the Financial and Insurance Sector

The event was organised by Pérez-Llorca and analysed the scope of the Regulation unifying strict and uniform standards for cybersecurity and digital operational resilience, including the supervision of IT service providers and the requirement for institutions to implement risk management strategies and recovery plans. Several Pérez-Llorca partners participated in the event: Joaquín Ruiz Echaury, Raúl Rubio and Josefina García Pedroviejo.

12/03/2024

IBA Insurance Conference 2024: AI in insurance and other global insights

Rafael Fernández, como Senior Officer del IBA Insurance Committee, fue co-chair de la Conferencia Anual de Seguros de la IBA 2024 y moderador de la charla “Transactional risk insurance update” en la que se analizó el panorama de las principales novedades y tendencias en la suscripción de seguros de riesgo transaccional en Europa, América Latina y EE.UU. en los últimos 12 meses.

Por otro lado, Joaquín Ruiz Echaury moderó la charla “Evolución de la responsabilidad civil por productos defectuosos y su impacto en los seguros” en ella se trataron las últimas novedades normativas en materia de responsabilidad civil por productos defectuosos y tuvo lugar un debate sobre cómo pueden afectar estos cambios al mercado de la responsabilidad civil por productos defectuosos en los seguros.

12/03/2024

IBA Insurance Conference 2024: AI in insurance and other global insights

Rafael Fernández, as Senior Officer of the IBA Insurance Committee, was co-chair of the IBA 2024 Annual Insurance Conference and moderator of the talk “Transactional risk insurance update” in which he analysed the panorama of the main developments and trends in transactional risk insurance underwriting in Europe, Latin America and the US in the last 12 months.

In addition, Joaquín Ruiz Echaury moderated the talk “Evolution of product liability and its impact on insurance”, which dealt with the latest regulatory developments in product liability and led to a debate on how these changes may affect the product liability market in insurance.



18/04/2024

La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero

Joaquín Ruiz Echaury fue ponente en el seminario organizado por SEAIDA mediante el cual se buscaba dar a conocer los aspectos más significativos que subyacen de la futura norma sobre la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero desde la perspectiva del sector asegurador y profesional.

Al finalizar la mesa debate sobre la Autoridad se hará entrega del Diploma de Investigación de SEAIDA del año 2023 al premiado, haciéndose pública la convocatoria para el año 2024.

06/05/2024

Las Mañanas de la AJPS: Encuentro de Capitanes

Nuestro socio, Rafael Fernández, entrevistó a Enrique López, Country Manager Iberia de AXA XL y a Manuel López Muñoz, CEO de Grupo Atlantigo, el pasado 26 de abril de 2025, en el evento “Las Mañanas de la AJPS: Encuentro de Capitanes”, donde se debatió sobre divergencia empresarial en el sector asegurador.

18/04/2024

The Financial Ombudsman Authority

Joaquín Ruiz Echaury was a speaker at the seminar organised by SEAIDA to present the most significant aspects underlying the future regulation on the Financial Ombudsman Authority from the perspective of the insurance and professional sector.

At the end of the panel discussion on the Authority, the SEAIDA Research Diploma for the year 2023 was awarded to the winner, and the call for applications for the year 2024 was made public.

06/05/2024

Las Mañanas de la AJPS: Encuentro de Capitanes

Our partner, Rafael Fernández, interviewed Enrique López, Iberia Country Manager of AXA XL and Manuel López Muñoz, CEO of Grupo Atlantigo, on 26 April 2025, at the event ‘Las Mañanas de la AJPS: Encuentro de Capitanes’, where they discussed business divergence in the insurance sector.



03/06/2024

VIII Congreso Internacional de Derecho de Seguros, organizado por la Universidad de Salamanca y Seaida

Joaquín Ruiz Echaury participó en el VIII Congreso Internacional de SEAIDA en el cual se analizó la experiencia de los 40 años de vigencia y de aplicación de la Ley 50/1980, de 8 de octubre de Contrato de Seguro, en conexión con las nuevas realidades sociales, económicas-financieras y también tecnológicas que se han presentado y que se presentan en este nuevo tiempo y contexto europeo e internacional.

29/10/2024

Los riesgos de la Inteligencia Artificial. ¿Estamos seguros?

La Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña organizó esta jornada en el marco de la Cátedra Fundación Inade-UDC. En la mesa redonda, en la que participo Jesús Almarcha, abogado de Seguros de Pérez Llorca, se trató el tema de cómo se abordarán los riesgos de la IA y el papel que desempeñará el sector asegurador en su transferencia.

03/06/2024

VIII International Congress on Insurance Law, organised by the University of Salamanca and Seaida

Joaquín Ruiz Echaury took part in the VIII SEAIDA International Congress in which he analysed the experience of the 40 years of validity and application of Law 50/1980, of 8 October, on Insurance Contracts, in connection with the new social, economic and financial and technological realities that have arisen and continue to arise in this new era and in the European and international context.

29/10/2024

The risks of Artificial Intelligence. Are we sure?

The Faculty of Law of the University of A Coruña organised this conference within the framework of the Inade-UDC Foundation Chair. The roundtable, in which Jesús Almarcha, Insurance Associate at Pérez-Llorca, took part, focused on the issue of how AI risks will be addressed and the role that the insurance sector will play in their transfer.

26/11/2024

Cátedra Pérez-Llorca/IE - Impacto de la IA en el Sector Asegurador

En esta sesión, el equipo de Seguros y Reaseguros y de Derecho Digital analizaron, junto con otros expertos del Sector, el impacto de las alianzas comerciales entre aseguradoras y empresas tecnológicas que incluyen la optimización de la tecnología de la IA, la implementación de la IA en la industria aseguradora y el alcance de las nuevas fronteras de la responsabilidad y aseguramiento por creación y uso de IA.

En el evento participaron Raúl Rubio, Joaquín Ruiz Echaury, Rafael Fernández y Felipe Vázquez Acedo.



26/11/2024

Pérez-Llorca/IE Chair - Impact of AI on the Insurance Sector

In this session, the Insurance and Reinsurance and Digital Law team, together with other industry experts, discussed the impact of business partnerships between insurers and technology companies including the optimisation of AI technology, the implementation of AI in the insurance industry and the scope of new frontiers of liability and insurance for the creation and use of AI.

Raúl Rubio, Joaquín Ruiz Echaury, Rafael Fernández and Felipe Vázquez Acedo participated in the event.



5.8 Reconocimientos

Premios y reconocimientos

Legal 500 EMEA 2024

- » Insurance - Tier 1
- » Joaquín Ruiz Echaury – Hall of Fame
- » Felipe Vázquez – Next Generation Partner
- » Jesús Almarcha – Leading Associate

Chambers & Partners Europe 2024

- » Insurance Band 3
- » Joaquín Ruiz Echaury - Star Individual
- » Rafael Fernández - Up and Coming
- » Felipe Vázquez - Up and Coming

Premios Expansión Jurídico IX Edición

- » Finalista Mejor despacho en Seguros
- » Finalista Mejor operación: Asesor en una de las operaciones del año: adquisición de Liberty Seguros por parte de Generali

Iberian Lawyer Forty under 40 Awards 2024

- » Pérez-Llorca, finalista como mejor despacho de Seguros
- » Rafael Fernández, finalista como mejor abogado del año de Seguros

Pertenencia a organismos oficiales

Joaquín Ruiz Echaury

- » Miembro del Consejo Directivo de SEAIDA
- » Presidente del Seguro de Trabajo de Reaseguros de SEAIDA
- » Presidente del Grupo de Trabajo sobre Peritos y Arbitraje de CIAM-SEAIDA
- » Miembro del Consejo de Redacción de la “Revista Española de Seguros”
- » “Revista Española de Responsabilidad Civil, Circulación y Seguro”

Rafael Fernández

- » Senior Vice Chair Officer del Comité de Seguros de la IBA (International Bar Association).
- » Vocal de Relaciones Institucionales y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Jóvenes Profesionales del Seguro (AJPS).
- » Sección Española de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros (SEAIDA).
- » Miembro del Grupo de Trabajo de Seguros del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM).

5.8 Recognition

Awards and recognition

Legal 500 EMEA 2024

- » Insurance - Tier 1
- » Joaquín Ruiz Echaury - Hall of Fame
- » Felipe Vázquez - Next Generation Partner
- » Jesús Almarcha - Leading Associate

Chambers & Partners Europe 2024

- » Insurance Band 3
- » Joaquín Ruiz Echaury - Star Individual
- » Rafael Fernández - Up and Coming
- » Felipe Vázquez - Up and Coming

Expansión Jurídico Awards IX Edition

- » Finalist Best Insurance Firm
- » Finalist Best Transaction: Adviser on one of the deals of the year: Generali's acquisition of Liberty Seguros

Iberian Lawyer Forty Under 40 Awards 2024

- » Pérez-Llorca, finalist for Law Firm of the Year Insurance
- » Rafael Fernández, finalist for Lawyer of the Year Insurance

Professional organisations

Joaquín Ruiz Echaury

- » Member of the Management Board of SEAIDA
- » Chairman of SEAIDA Reinsurance Working Group
- » Chairman of the CIAM-SEAIDA Working Group on Experts and Arbitration
- » Member of the Editorial Board of the “Revista Española de Seguros”
- » “Revista Española de Responsabilidad Civil, Circulación y Seguro”

Rafael Fernández

- » Senior Vice Chair Officer of the Insurance Committee of the IBA (International Bar Association).
- » Officer for Institutional Relations and Member of the Board of Directors of the Association of Young Insurance Professionals (AJPS).
- » The Spanish Branch of the International Association of Insurance Law (SEAIDA).
- » Member of the Insurance Working Group of the Madrid International Arbitration Centre (CIAM).

6. Nuestro equipo

6.1 Seguros y Reaseguros Pérez-Llorca

El área de Seguros y Reaseguros de Pérez-Llorca está orientada a dar un servicio completo al sector asegurador y reasegurador, aglutinando conocimientos sobre sociedades, fusiones y adquisiciones, regulación y litigios, todo ello enfocado en las variadas especialidades y características que se derivan del mundo de los seguros.

El equipo de seguros se caracteriza por su completo conocimiento del sector. La exclusiva especialización se basa en años de experiencia trabajando con numerosas empresas de primer nivel que nos han otorgado un amplio conocimiento de las soluciones requeridos en este ámbito. El equipo se beneficia, además, del know-how del socio Joaquín Ruiz Echauri y de sus décadas de experiencia como especialista en seguros y reaseguros, así como de dos de los socios jóvenes más relevantes en el sector seguros en nuestro país, Rafael Fernández y Felipe Vázquez.

Esta experiencia específica del área de Seguros y Reaseguros, junto con las excepcionales capacidades de la firma en campos necesarios para el sector de los seguros, como el fiscal, el laboral, la protección de datos/privacidad, la gobernanza, la prevención de riesgos penales, la infraestructura, la competencia, entre muchos otros, hacen que nuestro equipo sea una solución multidisciplinar, sólida y completa para las empresas.

Nuestro equipo de Seguros y Reaseguros ofrece asesoramiento en tres ámbitos fundamentales para el sector:

- » **Corporate, M&A y Seguros Transaccionales:** nuestra práctica posee un amplio conocimiento de las especificidades de cualquier tipo de transacción tradicional, así como de las transferencias de cartera, acuerdos de reaseguro VIF, acuerdos de banca seguros y otros acuerdos de distribución complejos, fusiones transfronterizas y reorganizaciones de grupos de seguros. Asimismo, es uno de los principales asesores de entidades aseguradoras y agencias de suscripción en los procesos de suscripción y reclamaciones de todo tipo de seguros de riesgos transacciones, incluyendo el seguro de manifestaciones y garantías (Warranty & Indemnity Insurance, W&I), seguros de contingencias fiscales y seguros de riesgos contenciosos.
- » **Regulatorio:** el equipo cuenta con una amplia experiencia tanto en el funcionamiento y gobierno de entidades aseguradoras y mediadores de seguros como en sus relaciones con la Administración en autorizaciones y todo tipo de procedimientos administrativos. Nuestro asesoramiento incluye la representación en caso de inspecciones, la elaboración y configuración de nuevos productos y soluciones aseguradoras, insurtech y creación de canales de distribución de seguros óptimos, así como asesoramiento o asistencia en la suscripción de riesgos.
- » **Procesal:** asesoramos en todo lo relacionado con la denegación total o parcial de la cobertura, así como la tramitación de siniestros complejos o masivos, discusiones complejas sobre el alcance y delimitación de la cobertura, conflictos de

6. Our team

6.1 Pérez-Llorca Insurance and Reinsurance

Pérez-Llorca's Insurance and Reinsurance practice is geared towards providing a complete service to the insurance and re-insurance sector, combining knowledge of companies, mergers and acquisitions, regulatory matters and litigation, all of which is focused on the various special features and characteristics of the world of insurance.

The Insurance & Reinsurance team is characterised by its comprehensive knowledge of the sector. The unique specialisation is based on years of experience working with numerous leading companies, giving us extensive knowledge of the solutions required in this field. The team also benefits from the know-how of partner Joaquín Ruiz Echauri and his decades of experience as an insurance and reinsurance specialist, as well as two of the most talented young partners in the Spanish insurance sector, Rafael Fernández and Felipe Vázquez.

This specific experience in the insurance and reinsurance sector, together with the Firm's exceptional capabilities in other areas that are necessary for the insurance sector, such as tax, employment, data protection/privacy, governance, criminal risk prevention, infrastructure, competition, among many others, allow our team to offer a multidisciplinary, robust and complete solution for companies.

Our Insurance and Reinsurance team provides advice in three areas that are critical to the sector:

- » **Corporate, M&A and Transactional Insurance:** Our team has extensive knowledge of the special features of all types of traditional transactions, as well as portfolio transfers, VIF reinsurance arrangements, insurance banking arrangements and other complex distribution agreements, cross-border mergers and insurance group reorganisations. Pérez-Llorca is also a leading adviser to insurers and underwriting agencies on the underwriting and claims processes for all types of transactional risk insurance, including Warranty & Indemnity Insurance (W&I), tax contingency insurance and contentious risk insurance.
- » **Regulatory:** Our team boasts ample experience in both the operation and governance of insurers and mediators, as well as in their relationships with the Administration, in authorisations and all types of proceedings. Our advice includes representation in the event of inspections, the development and design of new insurance products and solutions, insurtech and the creation of optimal insurance distribution channels, as well as advice on or assistance with risk underwriting.
- » **Litigation:** We advise on all matters relating to the total or partial denial of cover, as well as the handling of complex or mass claims, complex discussions on the scope and delimitation of cover, reinsurance disputes and all

reaseguro y todas las implicaciones de cualquier otro siniestro sectorial en cualquier tipo de jurisdicción o sede arbitral. Este asesoramiento requiere una experiencia consolidada que se centra siempre en la búsqueda de las mejores soluciones y compromisos, tratando de evitar litigios innecesarios.

the implications of any other sectoral claims in any jurisdiction or arbitration venue. This advice requires consolidated experience which is always focused on finding the best solutions and compromises and trying to avoid unnecessary litigation.



Joaquín Ruiz Echaury

Socio/Partner

jruiz-echaury@perezllorca.com

T: +34 91 432 51 58



Rafael Fernández

Socio/Partner

rfernandez@perezllorca.com

T: +34 91 389 01 03



Felipe Vázquez Acedo

Socio/Partner

fvazquez@perezllorca.com

T: +34 91 432 51 20



Inês Palma Ramalho

Socia/Partner

iramalho@perezllorca.com

T: +351 211 255 512



Juan Pablo Nieto

Abogado/Lawyer

jpnieto@perezllorca.com

T: +34 91 389 01 04



Jesús Almarcha

Abogado/Lawyer

jalmarcha@perezllorca.com

T: +34 91 389 01 07



Boris Urquizu Barquet

Abogado/Lawyer

burquizu@perezllorca.com

T: +34 91 432 51 33



Irene Moreno

Abogada/Lawyer

imoreno@perezllorca.com

T: +34 91 384 74 50



Fátima Eizaguirre

Abogada/Lawyer

feizaguirre@perezllorca.com

T: +34 91 432 51 31



Luis María González

Abogado/Lawyer

lmgonzalez@perezllorca.com

T: +34 91 423 24 89



Pedro Peris Calderón

Abogado/Lawyer

pperis@perezllorca.com

T: +34 914 32 51 24



Gabriel Llull

Abogado/Lawyer

gllull@perezllorca.com

T: +34 91 410 10 76



Diego Samuel Arroyo

Abogado/Lawyer

darroyo@perezllorca.com

T: +34 91 410 08 37



Rodrigo Perez Gil

Abogado/Lawyer

rodrigo.perez@perezllorca.com

T: +34 91 423 66 74



www.perezllorca.com

BCN | BRU | CDMX | LIS | LON | MAD | MTY | NYC | SGP